

Departamento de Derecho Internacional
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Organización de los Estados Americanos

II Taller de Expertos/as de la Temática **Afrodescendiente** en las **Américas**

*Medidas de Acción Afimartiva, Legislación,
Políticas Públicas y Buenas Prácticas
Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Brasil*



Organización de los
Estados Americanos

**II Taller de
Expertos/as
de la Temática
Afrodescendiente
en las Américas**

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

SECRETARÍA GENERAL

José Miguel Insulza

Secretario General

Albert Ramdin

Secretario General Adjunto

Jean-Michel Arrighi

Secretario de Asuntos Jurídicos

Dante Negro

Director del Departamento de Derecho Internacional

OAS Cataloging-in-Publication Data

Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas (2nd: 2011: Washington, D.C.)

II Taller de Expertas/os de la Temática Afrodescendiente en las Américas: Medidas de acción afirmativa, legislación, políticas públicas y buenas prácticas : Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Brasil / organizado por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA en febrero de 2011.

p.; cm. Includes bibliographical references.

ISBN 978-0-8270-5647-3

1. African diaspora--America--Congresses. 2. Race discrimination--America--Congresses. 3. Racism--America--Congresses. I. Organization of American States. II. Title.

E29.N3 T35 2011

II Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas

Organizado por el Departamento
de Derecho Internacional de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría General de la OEA
en febrero de 2011



Organización de los
Estados Americanos

Departamento de Derecho Internacional
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Secretaría General
Washington, D.C.
2011

Presentación

El 22 de febrero de 2011 tuvo lugar en la sede de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C., el II Taller de Expertas/os de la Temática Afrodescendiente en las Américas, organizado por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.

El evento se llevó a cabo en el marco del “Proyecto para la incorporación de la temática afrodescendiente en las políticas y programas de la OEA”, financiado por CIDA Canadá. Dicho proyecto contempla, entre otras, la realización de varias actividades destinadas a dar una mayor visibilidad al tema dentro de la OEA y sus distintos órganos, así como en el marco del proceso de Cumbres. El Proyecto promueve además el empoderamiento de la sociedad civil vinculada a la temática afrodescendiente por medio de estrategias de capacitación, sobre todo en lo que se refiere a los derechos de las y los afrodescendientes y otros estándares internacionales que las/os amparan, por medio de cursos, talleres de formación, entre otros.

En el II Taller de Expertas/os de la Temática Afrodescendiente en las Américas intervinieron funcionarios/as de Ecuador, Panamá, Brasil y Estados Unidos que laboran en determinadas dependencias públicas que desempeñan funciones vinculadas a la temática afrodescendiente en sus respectivos países. El taller tuvo por finalidad la exposición y discusión de algunos temas específicos, en especial, medidas de acción afirmativa, políticas públicas, buenas prácticas y legislación pertinente a la población afrodescendiente en los mencionados países, con miras a elaborar posteriormente una publicación de carácter técnico-legal sobre dichos temas. Se espera que más adelante el Departamento de Derecho Internacional pueda incluir a otros países de la región en futuras publicaciones sobre la materia.

A través de esta complicación, el Departamento de Derecho Internacional pone a disposición de un público más amplio el conjunto de las presentaciones que tuvieron lugar en el marco del taller de referencia. Al mismo tiempo, se pretende realizar una contribución al desarrollo de la temática afrodescendiente, abordando un conjunto de temas específicos de especial relevancia para la misma.

Del mismo modo, se espera que esta publicación pueda ser empleada como referencia por los representantes de organizaciones afrodescendientes, los órganos políticos del Sistema Interamericano, incluido el Grupo de Trabajo instituido en la OEA con el mandato de elaborar un Proyecto de Convención Interamericana Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, y otros actores interesados.

Índice

Presentación	5
I. Palabras de apertura del II Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas	11
<i>Dr. Dante Negro</i> <i>Director del Departamento de Derecho Internacional</i>	
II. Presentaciones de las/os Expositoras/res	17
Ecuador	17
Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural <i>Catherine Chalá</i>	17
Panamá	27
El Consejo Nacional de la Etnia Negra: Un espacio ganado por la comunidad afrodescendiente dentro del Estado de Panamá <i>Ricardo Weeks</i>	27
Estados Unidos	37
Race, Ethnicity, and Social Inclusion Unit in the Bureau of Western Hemisphere Affairs of U.S. Department of State <i>Zakiya Carr Johnson</i>	37
Brasil	41
Políticas Públicas de Promoçãõ da Igualdade Racial: A Experiência do Brasil <i>Renato Dos Santos Ferreira</i>	41
Conclusiones	53
Conclusiones del II Taller de Expertas/os en la Temática Afrodescendiente en las Américas <i>Roberto Rojas Dávila</i>	53
III. Anexos	57
Panamá	57
Principal Marco Jurídico Nacional sobre Afrodescendientes	
Brasil	71
Principal Marco Jurídico Nacional sobre Afrodescendientes	

Programa del Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas	143
Hoja de Vida de las/os Expositoras/es	147
Proyecto para la Incorporación de la Temática Afrodescendiente en las Políticas y Programas de la OEA	151





I. Palabras de apertura del II Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas

Dr. Dante Negro

Director del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos

En nombre del Departamento de Derecho Internacional de la OEA y del mío propio, quiero darles la bienvenida a este “II Taller de Expertos/as sobre la Temática Afrodescendiente en las Américas”, el cual tiene como objetivo intercambiar ideas y recomendaciones sobre medidas de acción afirmativas, legislación, políticas públicas y buenas prácticas en relación a los Afrodescendientes en Ecuador, Panamá, Estados Unidos de América y Brasil.

El Departamento de Derecho Internacional ha venido contribuyendo desde hace algunos años al conocimiento, promoción y respeto de los derechos y otros estándares legales internacionales e internos que amparan a los y las Afrodescendientes en las Américas, participando en una serie de talleres y encuentros con representantes de la sociedad civil Afrodescendiente, difundiendo los trabajos de la OEA en este ámbito, y compartiendo experiencias y estrategias para incrementar la participación del colectivo afrodescendiente en el proceso de toma de decisiones de los Órganos políticos de la Organización.

Estas actividades han sido posibles en el marco de la implementación del “Proyecto para la incorporación de la temática sobre Afrodescendientes en las políticas y programas de la OEA”, el cual ha sido financiado por CIDA/Canadá. Este Proyecto se divide en 5 áreas: 1) capacitación para la participación de Afrodescendientes en los diferentes procesos de toma de decisión a nivel de la OEA y el proceso de Cumbres de las Américas; 2) organización de talleres de expertos/as de la temática Afrodescendiente para discutir aspectos técnico-legales de la temática; 3) difusión de la temática Afrodescendiente en actividades de promoción y difusión del derecho internacional; 4) publicación de documentos jurídicos sobre la temática Afrodescendiente; y 5) transversalización de la temática Afrodescendiente en las políticas y programas de la OEA.

Debemos resaltar que en estos dos años hemos capacitado a más de 300 representantes de organizaciones de la sociedad civil Afrodescendiente en temas tales como la estructura y funcionamiento de la OEA, el proceso de Cumbres de las Américas, los desarrollos actuales en la temática Afrodescendiente (Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación y la Intolerancia,

resoluciones de la Asamblea General y documentos de Cumbres), los estándares de protección adoptados a nivel regional (como por ejemplo, la Declaración de Santiago y otros), así como a nivel universal, y en posibles estrategias de participación de representantes Afrodescendientes en los espacios de toma de decisión de la OEA.

Hemos organizado previamente un primer taller de expertos/as donde se discutieron temas tales como las acciones afirmativas, el combate a la discriminación racial en el empleo, la carga de la prueba en actos de discriminación, y el “hate speech” o discurso de odio racial. En el presente Taller se intercambiarán experiencias en relación a las medidas de acción afirmativa, legislación, políticas públicas y buenas prácticas con relación a Afrodescendientes en Ecuador, Panamá, Estados Unidos de América y Brasil. Esperamos que más adelante podamos incluir a otros países a fin de contar con un conjunto de publicaciones más completas a nivel regional sobre estos temas.

El Departamento de Derecho Internacional ha difundido la temática Afrodescendiente buscando incorporar la misma en diferentes actividades que nosotros como Departamento organizamos y/o participamos para la difusión del Derecho Internacional. En ese sentido, la temática ha sido introducida en actividades académicas permanentes que el Departamento desarrolla, como son los Cursos de Derecho Internacional que organiza el Departamento todos los años en la ciudad de Río de Janeiro y otros. Asimismo, hemos introducido la temática en otra actividad particular que desarrolla el Departamento que son las Jornadas de Derecho Internacional, en las cuales se reúnen a profesores de Derecho Internacional de ésta y otras regiones para discutir los nuevos temas y desarrollos dentro de esta materia. Cabe señalar además que hemos otorgado becas que posibilitaron la participación de jóvenes abogados e internacionalistas afrodescendientes en nuestras actividades.

En lo que se refiere a publicaciones, el Departamento presentará oportunamente el libro “Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas. Acciones afirmativas, combate a la discriminación racial en el empleo, la carga de la prueba en actos de discriminación, y “hate speech” / discurso de odio racial”. También estamos a punto de publicar un libro titulado “Estándares de Protección de Afrodescendientes en el Sistema Interamericano. Una breve introducción”, y en breve realizaremos la publicación con los resultados del taller que hoy nos convoca.

En cuanto a la transversalización de la temática Afrodescendiente, hemos terminado de producir un documento que está orientado a capacitar a las diferentes áreas de la Secretaría General en la importancia de introducir la temática Afrodescendiente en los proyectos que dichas áreas vienen desarrollando. Nuestro objetivo es que los diferentes proyectos que se desarrollen a nivel de Secretaría General, así como en su momento introdujeron el aspecto de género, también puedan incluir la variable afrodescendiente como un elemento transversal, determinado el impacto que esto pueda tener en los resultados de dichos proyectos. En ese sentido, hemos producido un manual y en los anexos, hemos producidos un glosario de términos



sobre la temática Afrodescendiente. También hemos producido un documento sobre el desarrollo de la temática Afrodescendiente en el Sistema Interamericano. Además, hemos elaborado una guía introductoria sobre comunicación inclusiva de la temática Afrodescendiente, así como un directorio de organizaciones afrodescendientes que las diferentes áreas podrán utilizar cuando desarrollen estos proyectos a nivel de consulta.

Cabe destacar que el Departamento ha logrado establecer una sólida base de contactos a nivel regional con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática afrodescendiente. Asimismo, se ha impulsado un relacionamiento con otros actores a nivel internacional como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros. Debemos resaltar que el Departamento de Derecho Internacional ha participado en la Conferencia de Examen de Revisión de Durban en 2009, así como en la Novena Sesión del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana en 2010, ocasión en la cual dicho Grupo de Trabajo acogió las recomendaciones del Departamento en las propuestas para el Año Internacional de los Afrodescendientes. Además el Departamento ha sido invitado a realizar una exposición en la Décima Sesión del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana en 2011.

El Departamento prestó asesoramiento jurídico en la elaboración del Proyecto de resolución AG/RES 2550 “Reconocimiento del Año Internacional de los Afrodescendientes”, la cual se convirtió en la primera resolución específica adoptada por la Asamblea General de la OEA sobre Afrodescendientes. En la mencionada resolución se reafirma la importancia de la plena participación, libre y en igualdad de condiciones de las y los afrodescendientes en todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural de las Américas. Asimismo, encarga al Consejo Permanente de la OEA la realización de una sesión extraordinaria para conmemorar el Año Internacional de los Afrodescendientes.

El Departamento, en aras de la promoción y difusión de la temática Afrodescendiente, cuenta además con una página web en tres idiomas oficiales de la Organización. También ha promovido la inclusión y la diversidad dentro del personal del Departamento, diseñando un Programa de Acción sobre Afrodescendientes y obteniendo la aprobación de un proyecto adicional sobre entrenamiento político para líderes Afrodescendientes.

Con estas acciones, creemos que el Departamento de Derecho Internacional contribuirá a que este colectivo, que se ha visto históricamente discriminado, salga de la invisibilidad. Es nuestro objetivo coadyudar a que existan más personas comprometidas con la temática, que se especialicen en la misma, y colaboren con los esfuerzos por alcanzar instrumentos jurídicos internacionales obligatorios (tales como convenciones internacionales). También deseamos impulsar el desarrollo de políticas públicas al interior de cada uno de los países, que aseguren no sólo el respeto de los derechos de los y las afrodescendientes, sino que les garanticen una equitativa accesibilidad a todos los servicios y beneficios que ofrece una sociedad

democrática, participando en igualdad de condiciones en el proceso productivo y contribuyendo con su propio patrimonio y las particularidades que caracterizan a este colectivo a perfilar y construir la diversidad y la riqueza propias de nuestros países.

Les deseo los mejores éxitos en su participación en este II Taller y que de esta jornada podamos extraer elementos de juicio necesarios para seguir avanzando en el fortalecimiento de la temática Afrodescendiente.





II. Presentaciones de las/os Expositoras/res

Ecuador

Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural

Catherine Chalá

1. Diagnóstico y problema

1.1. Descripción de la situación actual del área de intervención

El racismo es un legado de la dominación colonial de Europa y de los esfuerzos de los intelectuales blancos de naturalizar la dominación y explotación a los no blancos. Estos intelectuales se inventaron las categorías de razas diferentes y desiguales. Es así que se creó una visión que a la vez que sobrevaloró la blancura como un ideal estigmatizó a los no blancos como inherentemente inferiores e incapaces.

El racismo no es innato a la naturaleza humana. En una sociedad basada en profundas desigualdades, el racismo es enseñado a los niños blancos y mestizos en las escuelas, en sus hogares, por la televisión y por la prensa.

Los niños indígenas y afrodescendientes también son socializados con valores que naturalizan las desigualdades sociales en las supuestas diferencias raciales. Es así que a los blancos y los mestizos se les enseña a ser racistas y a los niños indígenas y afrodescendientes se les enseña que el racismo y la desigualdad étnica son parte de la naturaleza humana.

El papel clave del racismo desde sus primeras apariciones en la época colonial, ha supuesto la negación de la participación social, política y económica a ciertos grupos y la legitimación de diversas formas de explotación. El racismo está incrustado en las relaciones de poder, refleja la capacidad de determinado grupo de formular una ideología que no solo legitima una relación de poder particular entre comunidades étnicas sino que resulta ser un mecanismo útil para reproducir esa relación.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, representado por el Eco. Rafael Correa estableció el Decreto 60 que expresa:

- Apruébese y aplíquese el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural.
- Decrétese los 365 días de combate al racismo y la discriminación racial.

1.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

A pesar de los avances realizados en el Ecuador en relación al reconocimiento del país como un Estado pluricultural y multiétnico (Constitución 1998) e intercultural y plurinacional (Constitución 2008), en la práctica indígenas y afroecuatorianos siguen siendo segregados y excluidos social, económica, cultural y políticamente.

Persisten fuertes prejuicios sobre estos colectivos, por parte de la población autodenominada blanca y mestiza, que se expresan tanto en la vida cotidiana así como dentro de la dinámica de las distintas instituciones públicas y privadas. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar, entonces, que el racismo y la discriminación (por razones étnicas, culturales, de género, etáreas, y otras) en el Ecuador del siglo XXI no sólo son problemas vigentes a nivel micro social, sino que están institucionalizados.

Es una realidad que abona a la profundización y persistencia de las desigualdades sociales, en tanto restringe todas las oportunidades y posibilidades de acceso a los servicios básicos a los indígenas y afroecuatorianos, así como a otros grupos poblacionales (mujeres, niñez y adolescencia, adultos/as mayores), viola sus derechos individuales y colectivos, y, los coloca como ciudadanos/as de segundo y hasta de tercer orden, todo lo cual coloca al Ecuador muy lejos de su proyecto de constituirse en un verdadero Estado de derechos, de justicia social, intercultural y plurinacional.

Aunque el racismo sea un fenómeno difícil de medir dado que es un componente total de la estructura social que se manifiesta en ideologías, sentimientos y prácticas de dominación, poder, opresión y exclusión política y socioeconómica por parte de actores sociales, se ha indagado datos que evidencian que esta práctica aún posee conflictos de identidad, impide la concreción de la interculturalidad como proyecto nacional y, sobre todo, se convierte en un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos por parte de sectores históricamente discriminados como indígenas y afro descendientes.

Consciente de esta realidad y en concordancia con el mandato constitucional de “garantizar sin distinción alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales... para sus habitantes” (Art. 3), y de prohibir la discriminación “... por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural...” (Art. 11, numeral 2), la Se-



cretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC) ha asumido el desafío de impulsar procesos de transversalización de los enfoques de interculturalidad y de inclusión en éste contexto se propone el presente Proyecto denominado “PLAN PLURINACIONAL PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACION RACIAL Y LA EXCLUSION ETNICA CULTURAL”

1.3. Línea Base de la Política de Inclusión

Según el último estudio realizado en septiembre del 2004, a 37.519 personas en todas las provincias teniendo una muestra integrada por el 81% de mestizos, 8,3% de indígenas, 6,6% de blancos y 3,9% de afroecuatorianos.

El grupo que más se expresó abiertamente racista fue el de los blancos, con el 14%, seguido por los indígenas (11%), y los mestizos (10%). Solo el 5% de los afroecuatorianos dijo ser abiertamente racista.

La discriminación racial, entendida como prácticas institucionales de exclusión, restricción o preferencia por motivos raciales y étnicos, afecta más a los afro descendientes, con el 88% y a los indígenas, con el 71%.

En el 2004, el 44% de los afroecuatorianos experimentaron discriminación, en la calle, el barrio, los autobuses y las oficinas públicas.

A la pregunta de quiénes reciben el mejor trato de la sociedad, el 80% de los consultados respondió que los blancos, el 6% que los mestizos y el 1% que indígenas y negros.

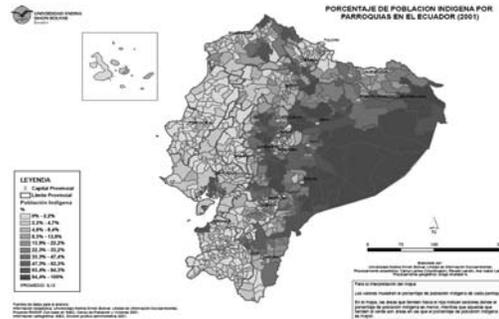
El estudio demuestra cómo los valores y creencias basados en la supremacía blanca, impregnan a la mayoría de acciones y aun pensamientos de los ecuatorianos. Así, mientras que se discrimina a los indígenas y los negros, se sobrevalora a los blancos, vistos como más guapos, más inteligentes, y aun con una capacidad moral superior.

Los sitios donde más se practica la discriminación racial según los consultados, son las oficinas públicas, con un 68%, las escuelas y colegios privados (62%), seguidos de bancos, partidos políticos, la Policía, las universidades y las Fuerzas Armadas.

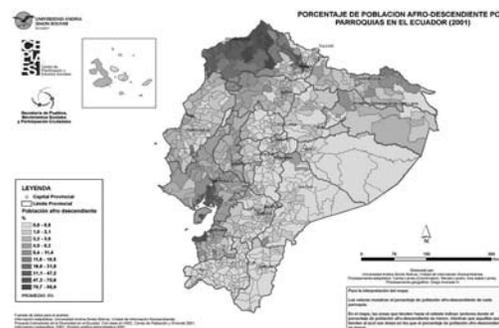
Los dos principales indicadores de la educación formal de los adultos presentan brechas grandes que combinan el sexo y la etnicidad. El grupo étnico más afectado es el indígena, y la situación más desfavorable corresponde a las mujeres indígenas. Entre ellas, el analfabetismo alcanzó en diciembre de 2008 el 33%, casi 5 veces superior a la media nacional del 7.6%. Su educación formal alcanzó los 3.5 años, menos de la mitad del promedio nacional (8.2 años).



Mapa 2



Mapa 3



Empleo, género y etnicidad. Tanto los indígenas como los afroecuatorianos sufren por una inserción laboral más precaria, con mayor subempleo y menor inserción en el sector moderno. Además existe una discriminación salarial, ya que bajo idénticas condiciones de educación, experiencia, dedicación y otras variables relevantes, los salarios de los indígenas y afroecuatorianos fueron menores a los del resto de los asalariados, en porcentajes del 11.7% y 5.7% en 2008. También existe una discriminación salarial por género, ya que los salarios femeninos son menores a los masculinos, incluso bajo idénticas condiciones laborales, en un porcentaje medio del 19.1%.

Nutrición y etnicidad. La desnutrición crónica entre los niños menores de 5 años afecta irreversiblemente el desarrollo intelectual y neuronal de los niños/as. Su prevalencia en el Ecuador es alta (26% en 2006), siendo particularmente grave entre los indígenas, con un valor casi doble al resto de la sociedad (51%). En el caso de los niños/as afroecuatorianos la desnutrición es menor a la media nacional, ya que este problema se ubica principalmente en la Sierra, donde la disponibilidad de proteínas en la dieta es menor a la Costa. En esta última región, donde residen la mayoría de los afroecuatorianos, la disponibilidad de pescado a bajo costo reduce la desnutrición

1.4. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios)

El racismo y la discriminación por razones étnicas y de identidad cultural, así como por cuestiones de género, edad, opción sexual, entre otras, han sido problemáticas profundamente arraigadas en el Ecuador desde la época colonial. Las ideologías racistas y sexistas, herencia de aquella época, se han constituido junto con otras, en la base sobre la cual se construyera, luego, el proyecto del mestizaje y de la identidad nacional, en el que se enarbolará a la población blanco-mestiza como el referente a seguir, en detrimento de la diversidad y riqueza cultural e identitaria que ha caracterizado a nuestro país.

A lo largo de los siglos, ello ha supuesto el despliegue de una serie de estrategias institucionales y cotidianas de negación, invisibilización e inferiorización de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, categorizándolos como los “otros”, desde una posición “blanco-céntrica”, y que ha justificado su histórica explotación y exclusión en todos los ámbitos del convivir social. Lo propio ha sucedido con las mujeres y con la niñez, adolescencia y juventud, quienes también han sido considerados y tratados como ciudadanos/as de segundo orden dentro de nuestra sociedad adultocéntrica y machista.

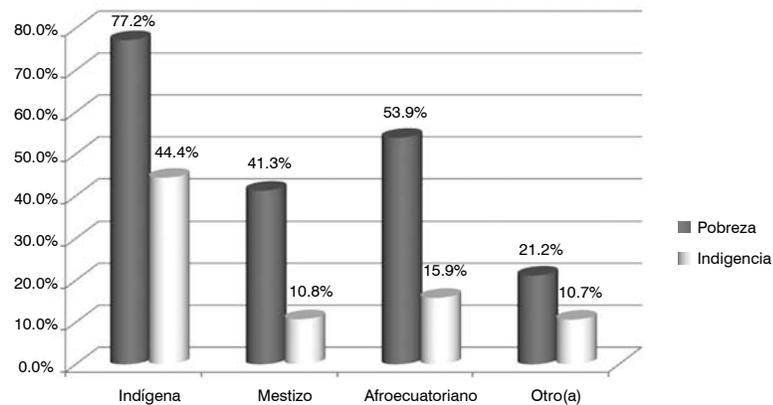
No se puede negar que, en las últimas décadas, en el país se ha experimentado importantes avances, sobre todo en términos declarativos en materia de: (1) derechos humanos, equidad de género, etc., promovidas desde el movimiento/organizaciones de mujeres, el colectivo LGTB, entre otros; y, (2) del reconocimiento del Ecuador como un Estado Plurinacional e Intercultural, el reconocimiento de los derechos colectivos, etc., como resultado de las luchas del movimiento indígena y de las organizaciones afroecuatorianas, de los últimos tiempos. No obstante, el racismo y discriminación hacia estos diversos conglomerados sociales persiste, de allí la importancia de cumplir y hacer cumplir con los mandatos expuestos en la Constitución Política del Ecuador, aprobada en septiembre 2008, en la que, a lo largo de varios artículos, se plantea la lucha contra la discriminación de cualquier tipo, el racismo y la violencia, así como la adopción por parte del Estado, de un sinnúmero de medidas en todos los ámbitos del convivir social, orientadas a promover la igualdad real a favor de las personas y grupos sociales que se encuentren en situación de desigualdad.

En otros instrumentos nacionales también se pone en evidencia la situación de desventaja que enfrentan aún hoy en día las nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos, así como las mujeres, los adultos/as mayores y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, proponiendo a la vez una serie de programas, proyectos y acciones orientados a superar estas problemáticas. Entre ellos podemos resaltar, por ejemplo, el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009 – 2013) y el Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural (2009).



La población objetivo del proyecto está enfocada básicamente en los grupos mas vulnerables por el racismo y la exclusión originada por pertenecer a un determinado grupo étnico, en el cuadro siguiente se describe la pobreza e Indigencia por etnicidad lo que nos permitirá identificar los grupos a priorizar.

Prevalencia de Pobreza e Indigencia por Etnicidad, ECV 2006



Porcentaje Nacional de Pobreza

2. Objetivos del proyecto

Objetivo General

Eliminar las distintas formas y prácticas sistemáticas de discriminación racial y de exclusión étnica cultural para promover una ciudadanía plural, intercultural e inclusiva a través de las políticas públicas del Estado.

Objetivos Específico:

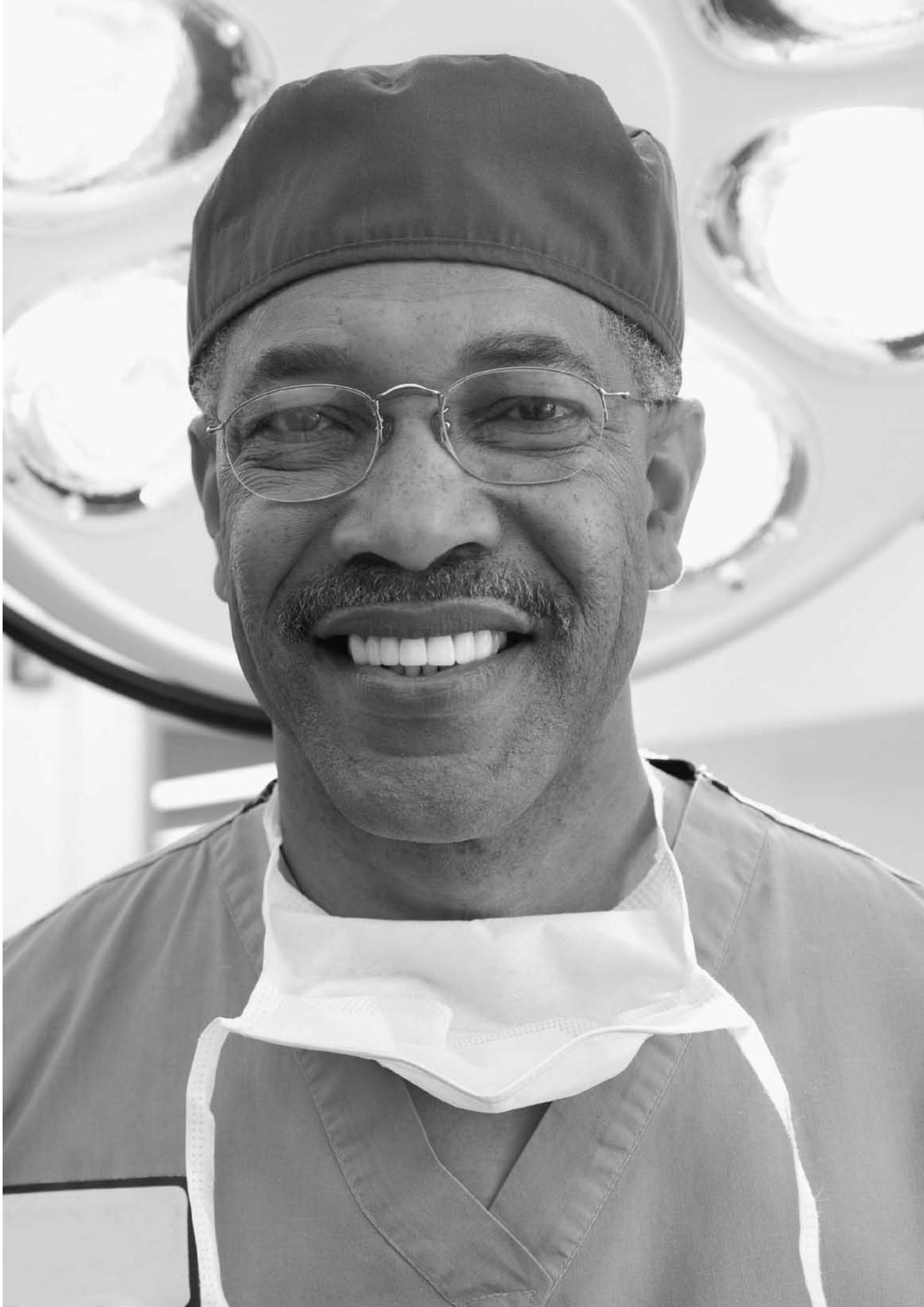
OE1.- Afirmar el carácter de DERECHOS, plurinacionalidad e interculturalidad, para revalorizar el papel de las culturas de las nacionalidades y pueblos en lo local.

OE2.- Ejecutar una política de acciones afirmativas para favorecer la igualdad de oportunidades.

OE3.- Incorporar el enfoque de género y generacional tanto en las acciones estatales de protección y garantía como en las iniciativas de la sociedad civil que regulen y aseguren eficacia en el mejoramiento de la calidad de vida.

3.2. Indicadores de resultado

Indicadores	Unidad
Número de jóvenes (hombres y mujeres) de la zona urbana y rural entre 15 y 20 años (indígenas, afros y montubios), insertados en la educación formal y concluido el bachillerato, en función de los convenios en el marco del Plan .	jóvenes escolarizados
Número de adultos (hombres y mujeres)de la zona urbana y rural de 20 a 40 años de edad de los grupos planteados en el Plan Plurinacional han accedido a una modalidad de educación no formal y han concluido sus estudios de nivel medio.	Adultos hasta 40 años
No. de instituciones educativas que han incorporado en sus planes y programas educativos “acciones afirmativas” que inciden en la comunidad educativa.	Instituciones educativas
No. de instituciones públicas y privadas que aplican “acciones afirmativas” en la inserción laboral de los grupos planteados en el Plan	Instituciones publicas y privadas





Panamá
El Consejo Nacional de la Etnia Negra:
Un espacio ganado por la comunidad afrodescendiente
dentro del Estado de Panamá

II. Presentaciones de las/os Expositoras/res

Panamá

El Consejo Nacional de la Etnia Negra: Un espacio ganado por la comunidad afrodescendiente dentro del Estado de Panamá

Ricardo Weeks

Históricamente en Panamá el racismo y la discriminación producto de ella, han venido manifestándose en distintas formas. Desde antes del inicio de la Republica diversos héroes Cimarrones libraron grandes luchas, para obtener la libertad y el respeto que merecían los afrodescendientes en la sociedad panameña, héroes como Bayano, Felipillo, Antón Mandinga.

Aunque los escenarios fueron cambiando con el tiempo y las épocas, las condiciones hasta posterior a la construcción del Canal, siguieron siendo las mismas y aún hasta más evidentes.

Como por ejemplo la lucha de los trabajadores del Canal por sus derechos, contra las diversas manifestaciones de racismo, ya que en Panamá rigieron los muchos sistemas de segregación racial que fueron implementados también, en Estados Unidos, por ser prácticamente Panamá una nueva Colonia Norteamericana.

El obtener igualdad de condiciones para los afrodescendientes en el Canal de Panamá, no fue una tarea de un día, ni de un año, fue un arduo trabajo que dio frutos que pueden observarse en la actualidad.

Una de las primeras grandes manifestaciones de organización del movimiento afrodescendiente, fue el Congreso del Negro Panameño, Celebrado del 10 al 13 de septiembre de 1981, en el Centro de Convenciones ATLAPA, en ciudad de Panamá.

El mismo surgió como una iniciativa para tratar de buscar soluciones a distintas necesidades e intercambiar las realidades que estaban enfrentando la población afrodescendiente de ese entonces.

Los temas discutidos fueron amplios y complejos, desde los aportes de los afrodescendientes a la identidad nacional, los problemas que enfrentaban los trabajadores en las áreas ocupadas por civiles y militares norteamericanos, las relaciones interculturales, hasta la situación de Apartheid que de alguna forma seguía latente en Panamá.

El Licenciado y especialista en temas afrodescendientes Alberto Barrow, narra en un artículo sobre el Congreso, su experiencia en la misma, y describe la participación de los líderes que estuvieron presente en el magno evento, y explica que existió una Mesa Directiva, con distinguidos dirigentes afropanameños(as), que fue integrada para guiar las sesiones, y donde participaron grandes referentes y prominentes profesionales del movimiento afrodescendiente.

Posterior a ello y después de las movilizaciones realizadas por líderes del movimiento, se creó la Ley no. 9 de 30 de mayo de 2000 que declara ese día, el Día Nacional de la Etnia Negra, esto abrió posibilidades reales de posicionar el tema y la situación de los afrodescendientes en el debate público.

A lo largo de la historia panameña se han manifestado, distintas formas de discriminación racial en temas altamente sensitivos, ejemplo de ellos son la discriminación en materia laboral; el acoso policial; el ataque por parte de los medios de comunicación, a través de estereotipos racistas y sexistas; el increíble acoso de estudiantes afrodescendientes, por parte de los profesores y autoridades de las escuelas, que llegaron hasta la prohibición de entrada a los planteles educativos, por algo tan cultural como peinar el cabello de las jóvenes en trenzas, práctica que es parte de la idiosincrasia afropanameña, en especial para las niñas y mujeres.

Uno de los temas que también fue muy controversial y hasta emblemático fue el derecho de admisión, el cual era mal interpretado, como el derecho que tenían los propietarios de establecimientos públicos o privados a determinar quién podría entrar o quien no a sus establecimientos, y en la gran mayoría de los casos, los afrodescendientes eran considerados personas peligrosas o de no buena presencia para acceder a los locales, por lo que era prohibida su entrada.

A finales del 2001 y del 2002 se inició toda una movilización para tratar de erradicar esta situación, lo que generó un debate público tan fuerte, que dio como resultado que se creara la Ley No 16 de 10 de abril de 2002, la misma fue propuesta por una movilización de la Sociedad Civil, liderada por el Licenciado Egbert Wetherborne. La Ley antes mencionada regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos y dicta medidas para evitar la discriminación racial.

El año siguiente y 22 años después del Congreso del Negro Panameño, en noviembre de 2003, las diferentes organizaciones que conformaban el movimiento afrodescendiente de ese entonces y que pertenecían a la Coordinadora Nacional de la Etnia Negra, decidieron crear el Foro Afropanameño – Plataforma Política de los Afropanameños.



Con la presencia de candidatos como Ricardo Martinelli Berrocal actual Presidente de la República de Panamá, Martín Torrijos Espino Ex Presidente de la República de Panamá y el representante de José Miguel Alemán Candidato Presidencial de ese entonces, firmaron un compromiso ante la comunidad con las organizaciones afro descendientes, organizadas bajo el Foro Afro panameño.

Posterior a los compromisos adquiridos por los representantes de los distintos partidos políticos de Panamá, se desencadenó toda una oleada de creación de normativa que regulaba materia afrodescendiente, como es el caso del Decreto Ejecutivo 124 de 27 de mayo de 2005, Por el cual se creó la Comisión Especial para el establecimiento de una política gubernamental para la inclusión plena de la etnia negra panameña (afrodescendientes).

El Decreto Ejecutivo No. de 8 de mayo de 2006, por medio del cual se crea la Comisión organizadora de las actividades culturales orientadas a resaltar el Día Nacional de la Etnia Negra en Panamá (Ministerio de Educación). La creación de esta norma mejoró considerablemente la integración de los temas afrodescendientes, en los centros educativos y ha sido el motor que ha impulsado de forma automática, que la celebración del día de la Etnia Negra se convierta en el mes de los afropanameños.

Uno de los momentos más importantes y del cual hacemos especial énfasis, es el momento en que se emite el Decreto Ejecutivo n° 116 (de 29 de mayo de 2007) Por el cual se crea el Consejo Nacional de la Etnia Negra. El mismo está constituido por 13 ciudadanos de la sociedad civil y representantes del Gobierno, entre los que podemos mencionar al Despacho de la Primera Dama de la Republica; El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); Ministerio de Gobierno y Justicia; Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL); Ministerio de la Vivienda (MIVI) y el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Después de la creación del Consejo se tomaron ciertas medidas, como el Análisis de Documentos relevantes de la ONU y de otros compromisos internacionales del Estado panameño.

También se celebraron 10 talleres de consulta, con representantes de las comunidades afrodescendientes del país, y se realizó una reunión con la Honorable Señora Matilde Ribeiro, en ese entonces Ministra de Estado del Brasil y Titular de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de Igualdad Racial (SEPPIR), y el estudio de documentos por consultores nacionales e internacionales.

Posterior a ello el 26 de mayo de 2006 la Comisión Especial presentó informe al Presidente, producto de un año de consultas, análisis y consenso, en acto al que asistieron representantes de la comunidad afropanameña y otros.

Las recomendaciones de la Comisión Especial, en su informe al Ejecutivo, estaban enfocadas a la reducción de la pobreza y promoción del desarrollo, reconocer la propiedad de tierras ancestrales, garantizar el acceso igualitario al empleo, permitir

la participación plena en la vida pública, regular los malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en contra de los afrodescendientes, garantizar acceso pleno a la salud integral, educación e identidad cultural, respeto a la libertad de culto y de religión, vivienda, voto de los panameños en el exterior, la aprobación de la Ley Contra la Discriminación en el empleo (NO ME PIDAS UNA FOTO), el desarrollo económico, la inclusión de consultores afrodescendientes en estudios, que tengan como finalidad la creación de políticas públicas, la participación en comisiones nacionales, los reportes a organismos internacionales, el nombramiento de afrodescendientes en altos cargos de la administración de pública, la inclusión de la cultura e historia afrodescendiente en los textos escolares, el respeto a las características somáticas por parte de directivos de la educación.

Producto de este informe, al crearse el Consejo Nacional de la Etnia Negra se le asignaron las siguientes tareas:

- Recomendar políticas y estrategias.
- Proponer políticas sobre discriminación.
- Dar seguimiento y evaluar políticas y programas formulados para la etnia negra o los afrodescendientes.
- Asesorar al Ejecutivo en lo referente a la etnia negra o los afrodescendientes.
- Estudiar los problemas fundamentales que causan la marginación de afrodescendientes.
- Sugerir al Ejecutivo medidas para proteger a la comunidad afropanameña.

El artículo 6 de dicho decreto establece que el Consejo Nacional de la Etnia Negra contará con una Secretaría Ejecutiva, adscrita al Ministerio de la Presidencia, la cual: Velará por la buena marcha de las reuniones y actividades del Consejo, darle seguimiento a los acuerdos y decisiones del Consejo, en términos generales, constituir soporte técnico y administrativo de la organización del Consejo.

A partir de allí la Secretaria ha jugado un papel fundamental en la inclusión plena de la población afrodescendiente, en el desarrollo integral de la sociedad panameña.

En el 2010, la Secretaria asumió el compromiso de acompañar y apoyar a la sociedad civil en el proceso de identificación y sensibilización en los Censos del 2010. Y antes de ello realizó 3 Reuniones con las distintas Organizaciones afrodescendientes, donde pudieron intercambiar ideas, buenas prácticas y proponer iniciativas en pro de la población afrodescendiente.

Como uno de los fines para la cual fue creada la Secretaría es apoyar, asesorar, y servir como vehículo de divulgación sobre la importancia de la cultura afrodescendiente en Panamá, contribuir al desarrollo integral de la etnia negra de Panamá además de instar a las entidades públicas, por conducto del Ministerio de la Presidencia, a que se cumpla con el principio de igualdad de oportunidades y al acceso a los servicios públicos.



En este sentido y en apoyo a la iniciativa que adelanta el resto del actual gobierno, en programas de rescate de la juventud en riesgo, en el marco de la celebración del Año Internacional de los Afrodescendientes. La Secretaría Ejecutiva de la Etnia Negra y la Coordinadora Nacional de la Etnia Negra, Apoyo la coordinación y Organización del 2do. Encuentro Nacional de jóvenes Afrodescendientes, actividad que se realizó en el mes de febrero de 2011 con la participación de más de 100 jóvenes afropanameños representantes de todas las provincias de Panamá. El mismo tuvo un impacto positivo en la vida de los participantes y a la vez establecieron nuevos mecanismos para la integración de la juventud afropanameña, en el mejoramiento de la sociedad Panameña.

Ese evento incluyó la participación y coordinación con los diferentes líderes juveniles de grupos afrodescendientes a nivel nacional. Los jóvenes participaron activamente y se esforzaron al máximo para lograr las metas preestablecidas.

Entre los productos que salieron del evento, se encuentran una manifestación de respaldo a los proyectos del Consejo y de la Secretaría. Entre los acuerdos logrados podemos mencionar la recomendación de:

- La creación de la Secretaria Ejecutiva de la Etnia Negra con rango Ministerial.
- La Ley que tipifica la discriminación como delito.
- Una marcha de jóvenes, promoviendo los derechos humanos y sensibilizando sobre la discriminación racial.
- Apoyar y contribuir a la campaña informativa sobre el Año Internacional de los Afrodescendientes.
- Aparte de lo antes expuesto los jóvenes se constituyeron oficialmente como la Red de Jóvenes Afrodescendientes de Panamá.
- También establecieron Comisiones encargadas de los siguientes temas: salud, educación, cultura, ambiental, participación política y empoderamiento juvenil, emprendimiento, comunicación. Cada comisión realizará 3 actividades importantes cada año. También se constituyó el comité encargado de la organización del III encuentro, el cual por votación popular será celebrado en el mes de febrero del próximo año en la Ciudad de Colón.

Posterior al II encuentro se inició una jornada de Talleres de Perfeccionamiento Profesional dirigido a la Comunidad de San Miguel, con la participación de 50 jóvenes del área. El Mismo taller será replicado en otras provincias y áreas de alto riesgo del país.

El 25 de diciembre del año 2010 la Secretaría Ejecutiva de la Etnia Negra realizó inicio una jornada de trabajo dirigida a la población infantil vulnerable del Barrio de San Cristóbal, Corregimiento Juan Díaz, donde existe un alto índice de población afrodescendiente. En dicha jornada se realizó un espectáculo para unos 1,500 niños y niñas de este sector como inicio de las actividades del “Año Internacional de los Afrodescendientes”. Se detectó que en este barrio se necesitaba la reconstrucción

del complejo deportivo, en conjunto con el Programa de Ayuda Nacional, se ha levantado el plano para iniciar los trabajos de reconstrucción

En el 2011 también se financió la Primera Asamblea del Círculo de Juventud Afrodescendiente de las Américas. Entre sus objetivos estuvieron, el posicionar los temas de juventud Afrodescendientes en las distintas agendas de la Región e institucionalizar su estructura. Participaron organizaciones de países como: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay.

Los dos eventos tanto a nivel nacional como internacional, servirán para visibilizar la problemática específica de las juventudes afrodescendientes en materia de derechos humanos, elaborar criterios comunes sobre los aspectos que debe incluir las políticas públicas que afecten a las juventudes afrodescendientes, así como visibilizar a las juventudes afro-panameñas como sujetos de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales.

La Secretaría de la Etnia Negra, en conjunto con la Universidad de Panamá y otras instituciones del Gobierno tales como la Policía Nacional, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Órgano Judicial y otras, trabajan en la implementación de un Programa de Intervención en Comunidades de Alto Índice de Violencia y Riesgo Social, brindándole atención integral y el empoderamiento de la población de estas comunidades, tales como Río Abajo, Curundú, San Miguel, las cuales cuentan con una población afrodescendiente mayoritaria.

La Secretaria Ejecutiva también ha estado apoyando los distintos, programas de prevención de violencia contra las mujeres, con especial énfasis en mujeres afropanameñas.

La Secretaría, en conjunto con la Fundación Unidos por Colón, desarrolló actividades culturales orientadas a resaltar el aporte científico, cultural, económico y laboral de la etnia negra en Panamá. Entre las actividades se pueden resaltar: Charlas Culturales sobre la identidad de los y las afrodescendientes, exposición de pinturas, confección de máscara de diablo, intercambio cultural, Desfile de la Etnia Negra, pintura de centro en positivo por una mejor comunidad, Certamen Miss Belleza Negra.

Como aporte a las políticas sociales que lleva adelante el Gobierno Nacional, la Secretaría Ejecutiva de la Etnia Negra, en conjunto con los estudiantes del Colegio José Antonio Remón Cantera y los egresados del plantel, promoción '84, participará en unas jornadas de limpieza y conservación del medio ambiente.

En el plano espiritual se realiza cada año el Festival de Alabanza y Adoración que realiza "Ministerio Punta de Lanza Hacia las Naciones" desde 2005. En este tipo de evento se busca resaltar los valores morales, orientando a la juventud afrodescendiente para que sean mejores personas, que aprendan a valorarse a sí mismos



y a los demás, crecer en dignidad y tener una cultura humanista y a la vez alejarlos de la violencia, las drogas y el alcohol.

En la Provincia de Colón se realizó la primera jornada de capacitación denominada “Turismo, Cultura y emprendimiento: Claves del éxito en el Año Internacional de los Afrodescendientes”, para resaltar la cultura, el turismo y el emprendimiento entre los jóvenes, como medida de prevención contra la violencia.

También han impulsado la realización de Ferias Afro Culturales, con el objetivo de impulsar el turismo y por ende la economía de la región, además de preservar y divulgar la cultura, valores étnicos y raciales.

Considerando que el Instituto Nacional de Cultura es la entidad encargada de orientar, fomentar, coordinar, dirigir y promover actividades culturales a lo largo del territorio nacional; además de proteger, rescatar, difundir y conservar el Patrimonio Cultural e Histórico de nuestro país se trabajó en estrecha coordinación interinstitucional, lo que fortaleció aún más el éxito de los eventos.

En Panamá aún se encuentra en proyecto la creación del primer programa de becas para jóvenes afrodescendientes de Panamá. Constituyéndose esta como una de las primeras acciones afirmativas para afrodescendientes aplicadas a lo largo y ancho de la República de Panamá.

También se ha creado la Comisión para revisión del Plan de Acción de la Etnia Negra, la cual contempla todos los proyectos que han presentado la Sociedad Civil. El Plan de Acción, enumera las actividades preparadas, orientadas principalmente a dar a conocer y difundir la esencia de las tradiciones, la idiosincrasia cultural y rescate de la identidad afropanameña; el apoyo a jóvenes afropanameños en alto riesgo social y ayuda logística a las comunidades de escasos recursos con mayor porcentaje de afrodescendientes.

El restablecimiento de la Comisión contra la Discriminación; el Festival Nacional de Diablos y Congos; la Implementación del Proyecto Quilombos de las Américas, en la Provincia de Darién Chepigana; la apertura de la Oficina de la Secretaria Ejecutiva de la Etnia Negra, en la Provincia de Colón, la cual cuenta con uno de los mayores porcentajes de población afrodescendiente en la República de Panamá. Y entre los últimos proyectos se encuentra, la construcción de un Hogar de Ancianos Afrodescendientes.

En la actualidad el Gobierno nacional ha manifestado la intención plena de crear la Secretaría Nacional de la Etnia Negra; aspiración que la comunidad plasmó en la Política y Plan de Inclusión de los Afropanameños presentado al Ejecutivo en el año del 2006, ya que en la actualidad la Secretaria Ejecutiva Nacional de la Etnia Negra, que por lo antes expuesto se ha constituido en la figura o representación Gubernamental para atender las distintas problemáticas de los afrodescendientes.

Aunque aún en Panamá no existen acciones afirmativas que garanticen condiciones especiales o derechos por el hecho de ser afrodescendientes, y las que lleguen a existir aún están en proceso. Definitivamente, si se han desarrollado un gran número de políticas públicas y de buenas prácticas por parte de los distintos gobiernos, destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población afrodescendiente. Sin embargo, aún queda un arduo camino por recorrer.





II. Presentaciones de las/os Expositoras/res

Estados Unidos

Race, Ethnicity, and Social Inclusion Unit in the Bureau of Western Hemisphere Affairs of U.S. Department of State

Zakiya Carr Johnson

In almost every country in the Western Hemisphere, people of African descent have left an indelible mark on modern-day expression; in music, culinary arts, dance, language, literature, science, and much more. The contributions men and women of African descent made during slavery and for generations afterward are often undervalued and unrecognized. Although they make up more than one-third of the population in Latin America and the Caribbean, people of African descent have historically been and continue to be underrepresented in government, civil society, and the media.

The Bureau of Western Hemisphere Affairs' office of Public Diplomacy and Public Affairs has shared African-American experiences and culture with audiences across the region by providing unique opportunities for young people, women and men of African descent to access English language programs, and take part in educational, cultural and entrepreneurial exchanges in the United States.

In 2008, the Bureau embraced the diplomacy of racial, ethnic and social inclusion and consolidated its efforts to promote equality with countries like Brazil and Colombia through bilateral Action Plans. These agreements bring together governments, civil society and private sector to share best practices and conduct people-to-people exchange on issues like equal access to justice, environmental justice, health, access to quality education, culture and communication.

Increased interest in expanding these initiatives led to the creation of the Race, Ethnicity, and Social Inclusion Unit under the Bureau of Western Hemisphere Affairs in 2010. The Unit coordinates the Brazil and Colombia Action Plans on Racial and Ethnic Equality, and advises leadership on the implementation of related bilateral and regional initiatives. As a special part of the Unit's mandate, we are working with every office and post in the region to engage in the commemoration of the International Year for People of African Descent.

The United Nations General Assembly and the Organization of American States (OAS) have proclaimed 2011 the International Year for People of African Descent (IYPAD). The year will focus on strengthening national, regional, and international cooperation to benefit people of African descent and promote a greater knowledge of and respect for their diverse heritage and culture.

During the International Year for People of African descent, the Race, Ethnicity and Social Inclusion Unit is coordinating U.S. Department of State collaboration in host countries regionally to: promote inclusion and equal participation of people of African descent in all aspects of political, economic, social, and cultural life; explore our shared regional African Diaspora roots; create awareness of and respect for the diverse heritage, culture, and contributions of African descendants to science and technology, education, independence and civil rights movements, agriculture, language, cuisine, culture, and the arts. We will also engage multilaterally to bolster continued inter-regional dialogue and cooperation.

In the Western Hemisphere, approximately 12 million Africans were brought to the Americas over the 400 year history of the transatlantic slave trade. An estimated 90% of those enslaved Africans ended up in Latin America and the Caribbean; 5% went to the United States. Today, African descendants make up one-third of the total population in the hemisphere. They are the majority of the Caribbean population, however the largest numbers of African descendants are found in Brazil, the United States, Colombia, Venezuela, and Ecuador.

Despite historic discrimination and on-going exclusion and inequality, people of African descent have made significant contributions in their respective countries in the Western Hemisphere and around the world. Through initiatives like the U.S.-Brazil and the U.S.-Colombia Action Plans to Promote Racial and Ethnic Equality we have made significant progress but there is so much more to do.

President Obama stated¹ that the Year for People of African Descent is “an opportunity to recognize the myriad ways that men and women of African descent have strengthened our countries and enriched our societies.” Secretary Clinton

¹ <http://m.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/08/presidential-proclamation-pan-american-day-and-pan-american-week>



expressed² that the International Year for People of African Descent is “an opportunity for all of us around the globe to celebrate the diversity of our societies and to honor the contributions that our fellow citizens of African descent make every day to the economic, social and political fabrics of our communities.”

We hope the International Year will mark a change in how people of African descent are incorporated in policies, programs, and initiatives to strengthen our relationships with our neighbors in the region.

² <http://www.state.gov/secretary/rm/2011/01/155435.htm>





II. Presentaciones de las/os Expositoras/res

Brasil

Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial A Experiência do Brasil

Renato Dos Santos Ferreira

1. Introdução

A intervenção do Estado brasileiro na área da promoção da igualdade racial é relativamente recente. A partir dos anos 1980, como fruto da atuação dos movimentos sociais negros, cresceu a compreensão de que a proibição legal da discriminação racial era insuficiente para o efetivo enfrentamento das desigualdades baseadas em raça e etnia.¹ O processo de elaboração da Constituição Brasileira de 1988 contribuiu para isso. Naquele momento, a partir do reconhecimento do caráter pluricultural e multiétnico da sociedade brasileira, o racismo passou a ser considerado crime inafiançável e imprescritível, assim como as Comunidades Remanescentes de Quilombos tiveram reconhecido seu direito a terra.²

Em 1995, como resultado da Marcha Zumbi Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, realizada pelo Movimento Negro, o Governo brasileiro assumiu um conjunto de ações pontuais em diversas áreas. Mais tarde, tais ações ganham novo ímpeto durante o processo preparatório da III Conferência Mundial contra o Ra-

1 A exemplo da Lei Afonso Arinos - nº 1.390, de 3 de julho de 1951 que inclui entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor; o Decreto nº 1.171, de 22 de Junho de 1994 que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; o Código Penal Brasileiro - Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, institui no seu artigo 40 as penalidades em caso de injúria pautada em elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência; Lei Caó nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e as respectivas penalidades.

2 É regulamentado o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, através do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.

cismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em Durban, África do Sul, em 2001. Neste período, o Governo brasileiro passa a reconhecer a existência de desigualdades no acesso a direitos baseadas em raça e etnia, criando, assim, as condições para o avanço dos debates sobre a adoção de políticas de ação afirmativa.

Em 2010, a população total do Brasil era 190 milhões de habitantes, dos quais mais de 90 milhões, ou 50,6%, correspondiam à população negra.³ Contudo, a maior população de afro-descendentes no mundo ainda se encontra sobre-representada nas camadas sociais menos favorecidas. A reversão de tal quadro foi prioridade no Governo Lula e continuará sendo no da presidenta Dilma Rousseff.

2. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Contexto, Estratégias e Atuação

Em 2003, o Governo do Presidente Lula criou a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), órgão de assessoramento da Presidência da República, com a finalidade de formular, coordenar e articular políticas e programas para a promoção da igualdade e a proteção dos direitos dos grupos raciais e étnicos, com ênfase na população negra. Desse modo, a SEPPIR assumiu o papel de indutora da atuação de outros ministérios e órgãos de governo, assim como de organismos privados nacionais e internacionais.

A SEPPIR atua tendo por base as diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual (PPA), principal ferramenta de planejamento das ações do Governo Federal. Os objetivos do PPA expressam o disposto na Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR)⁴, cujas ações se desdobram em 12 eixos do Plano Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Planapir).⁵

a. Plano Plurianual (PPA)

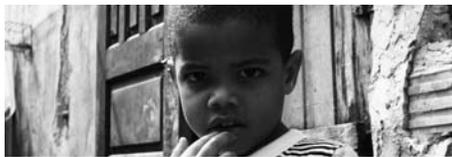
O PPA 2008-2011 tem como lema “Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade”. Foi construído a partir de três pilares: o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e a Agenda Social. Entre os dez objetivos de governo que estabelece, dois dizem respeito diretamente à atuação da SEPPIR:

- Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia, e a cidadania, com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos;
- Promover a inclusão social e a redução das desigualdades.

3 Considera-se população negra a somatória de pretos e pardos.

4 Instituída pelo Decreto nº 4.886, de 20 de novembro de 2003.

5 Criado pelo Decreto nº 6.872 de 04 de junho de 2009 que aprova o PLANAPIR e institui o seu Comitê de Articulação e Monitoramento



b. Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR)

A PNPIR tem como princípios norteadores a transversalidade, a descentralização e a gestão democrática. Estes são desenvolvidos de maneira simultânea e orientam o conjunto das ações do governo federal e a relação deste com as demais esferas da administração pública, instituições privadas e com a sociedade civil.

O princípio da transversalidade refere-se à necessidade de incorporação da equidade étnicorracial às diversas iniciativas do Estado brasileiro, em particular nas áreas da saúde, da educação, da cultura, da justiça, da segurança, entre outras. No cumprimento deste princípio a SEPPIR se faz presente em vários espaços intersetoriais instituídos por diversos órgãos do Governo Federal, a exemplo de Conselhos de Políticas Setoriais, Comitês de Monitoramento, Grupos de Trabalhos e Comissões Organizadoras de Conferências Nacionais.

A descentralização diz respeito à inserção da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial no sistema federativo, em atendimento à exigência da Constituição, por meio da distribuição de competências entre os entes federados, sendo a superação da pobreza e a inclusão social de segmentos historicamente excluídos obrigações comuns da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Para garantir a descentralização da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em outubro de 2003 foi criado o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (FIPIR), com a finalidade de capacitar gestores (as) estaduais e municipais, bem como planejar, executar e monitorar a implementação desta Política Nacional nos Estados e Municípios.

O princípio da gestão democrática implica na instituição de mecanismos de controle social dos programas e ações contidos na Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Assim, em novembro de 2003, foi instalado o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), órgão colegiado de caráter consultivo que integra a estrutura básica da SEPPIR. O Conselho é composto por 22 órgãos do Poder Público Federal, 19 entidades da sociedade civil, escolhidas através de edital público, e mais três pessoas indicadas, com notória atuação na área da promoção da igualdade racial.

c. Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Planapir)

O Planapir estabelece a adoção de medidas afirmativas, plano de ação e um modelo de gestão, monitoramento e avaliação das políticas. Cumpre a função de nortear as ações do Estado brasileiro no campo das políticas de promoção da igualdade racial.

O Plano foi construído com base nas políticas de redução das desigualdades sociais desenvolvidas por órgãos do Governo Federal e as resoluções da I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR), sistematizadas em 12

eixos de atuação: (i) Trabalho e Desenvolvimento Econômico; (ii) Educação; (iii) Saúde; (iv) Diversidade Cultural; (v) Direitos Humanos e Segurança Pública; (vi) Comunidades Remanescentes de Quilombos; (vii) Povos Indígenas; (viii) Comunidades Tradicionais de Terreiro; (ix) Política Internacional; (x) Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar; (xi) Infra-estrutura; e (xii) Juventude.

d. Principais Ações

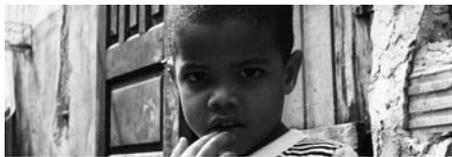
Em razão do limite deste documento, e sem prejuízo de outras ações desenvolvidas pelo Governo brasileiro, destacam-se a seguir alguns dos principais projetos e programas de coordenação ou execução direta da SEPPIR.

No eixo de trabalho e desenvolvimento econômico, vale destacar o Plano Setorial de Qualificação (Planseq) para negros, negras e afro-descendentes, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. Seu objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e a capacitação profissional de jovens e adultos afro-descendentes através de Cursos de Empreendedor Individual nas áreas de comércio e serviços. A meta é atender 25 mil profissionais em todo o território nacional. Merece também menção a Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidades e de Tratamento de Gênero e Raça no Trabalho que tem por objetivo promover políticas públicas de igualdade de oportunidades e de tratamento, e de combate a todas as formas de discriminação de gênero e raça, no emprego e na ocupação.

Com o Ministério de Ciência e Tecnologia, está sendo executado o Programa Institucional de Iniciação Científica - PIBIC nas Ações Afirmativas. Trata-se de um programa-piloto que oferece bolsas de Iniciação Científica a estudantes de universidades públicas que tenham programa de ações afirmativas. O objetivo é ampliar as oportunidades de formação técnico-científica de estudantes negros(as), assim contribuindo para a sua permanência qualificada na vida acadêmica.

No eixo Saúde, foi instituída a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN). O objetivo geral é a redução das desigualdades etnicorraciais entre brancos e negros, por meio da atenção às doenças e agravos prevalentes na população negra, bem como do enfrentamento à discriminação racial, que determina o acesso e o atendimento diferenciado no cotidiano dos serviços de saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi elaborada com o apoio do Ministério da Saúde por meio de uma metodologia participativa que envolveu a sociedade civil organizada, pesquisadores, gestores e profissionais de saúde de vários estados brasileiros.

No eixo direitos humanos e segurança pública, destaca-se o Projeto Farol – Oportunidade em Ação, voltado a jovens em situação de vulnerabilidade social, em particular, negros e negras no âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI). Os objetivos do projeto são: ressocializar jovens entre 15 e 24 anos por meio de projetos educativos e profissionalizantes de promoção da cidadania e dos direitos humanos; e apoiar ações e atividades de estímulo a trabalhos comunitários, articulados com iniciativas do poder público.



No que se refere às Comunidades Quilombolas⁶, a Constituição de 1988 reconheceu os direitos aos remanescentes destas comunidades assegurando-lhes o direito a terra e ao desenvolvimento econômico e social. No ano de 2004, o Governo Brasileiro criou o Programa Brasil Quilombola, abrangendo um conjunto de ações integradas entre diversos órgãos governamentais. Seu objetivo é o desenvolvimento econômico, social sustentável das comunidades com o fomento à participação social de seus representantes em diferentes esferas de proposição e formulação de políticas públicas e apoio as suas associações representativas.

No eixo diversidade cultural, o projeto A Cor da Cultura, já em sua segunda fase, foi desenvolvido pela SEPPPIR e parceiros visando à valorização da cultura afro-brasileira, por meio de programas audiovisuais que servem de material paradidático na implementação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), modificada pela Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. A meta é formar três mil multiplicadores das redes de ensino, organizações não governamentais e Pontos de Cultura, com repasse de metodologia e reprodução dos kits educativos. Também neste eixo, vale notar o projeto Clubes Sociais Negros, de resgate e memória de espaços associativos, originados da necessidade de convívio social dos afro-brasileiros, de caráter beneficente, recreativo e cultural. Sua defesa é considerada prioritária no âmbito das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural do país.

Finalmente, no eixo Política Internacional, são desenvolvidas ações, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, seja na relação da SEPPPIR com outros países, com organismos multilaterais e agências de fomento. Estas envolvem troca de experiências, fortalecimento institucional e formação de lideranças, em especial para a juventude negra e as comunidades negras tradicionais.

Neste sentido, foram estabelecidos mecanismos de intercâmbio e cooperação internacional para a capacitação de quadros para o ensino da história e cultura da África e da Diáspora e outras áreas de interesse. O Programa Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia, implementado pelo Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, tem por objetivo promover o acesso de afro-descendentes à carreira diplomática brasileira. O Programa oferece bolsas para os estudos preparatórios ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata que, a partir deste ano, contará com uma reserva de 10% das vagas para afro-descendentes, na primeira fase do processo seletivo.

São também concedidas bolsas através de Programas de Formação Complementar em ambiente internacional para estudantes de graduação, mestrado, doutorado, bem

⁶ Existem 3524 comunidades quilombolas identificadas no Brasil. Devemos ressaltar que os grupos que hoje são considerados remanescentes de comunidades de quilombos se constituíram a partir de uma grande diversidade de processos, que incluem as fugas com ocupação de terras livres e geralmente isoladas, mas também as heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de serviços prestados ao Estado, a simples permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior das grandes propriedades, bem como a compra de terras, tanto durante a vigência do sistema escravocrata quanto após a sua extinção.

como estágios de inserção profissional. O Programa de Formação Complementar em Direitos Humanos, uma parceria entre a SEPPIR e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, oferece estágio de 03 meses para mestres e doutores na Delegação Brasileira junto ao Alto Comissariado de Direitos Humanos em Genebra.

No campo do fortalecimento da participação política da juventude, vale citar o Programa de Capacitação de Jovens Líderes Indígenas e Afro-descendentes na Ibero- América e o Programa de Capacitação de Jovens Líderes Africanos e Afro-descendentes na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

No que se refere às Comunidades Tradicionais, são desenvolvidas iniciativas que visam dar visibilidade à questão em fóruns internacionais; e estimular parcerias internacionais para o desenvolvimento local de comunidades tradicionais e comunidades afro-rurais nas Américas e na África. Resultam deste esforço parcerias para a execução dos projetos: Quilombos das Américas; Semente Criola, e outros projetos de cooperação técnica em negociação com o Suriname, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e Libéria.

Cabe ainda registrar que está em andamento o Plano de Ação Conjunto Brasil-Estados Unidos para a Eliminação da Discriminação Étnico-Racial e a Promoção da Igualdade, iniciativa inovadora e pioneira de cooperação internacional paritária, envolvendo a participação, dos governos, da sociedade civil e da iniciativa privada dos dois países.

Em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil nas Conferências Preparatórias Regionais para Durban e a sua Revisão, o Governo Brasileiro tem apoiado o Grupo de Trabalho Rodada de Censos, visando à inclusão de dados desagregados por cor/raça nos censos e pesquisas domiciliares nos demais países da América Latina.

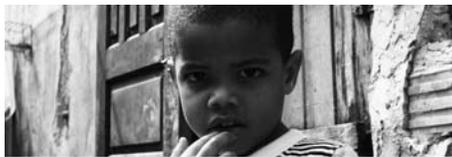
É neste contexto que a SEPPIR tem buscado fortalecer o intercâmbio com os países e com a Organização dos Estados Americanos/OEA, enquanto estruturas regionais estratégicas para o avanço da promoção da igualdade racial nas Américas.

3. A Legislação sobre a população afro-descendente no Brasil

As reivindicações do Movimento Negro foram determinantes para que o Estado produzisse uma legislação contra o racismo e seus efeitos. Por conta disto, o direito anti- discriminação racial integra o ordenamento jurídico brasileiro com normas de duas naturezas: leis anti-racistas e as ações afirmativas.

As leis anti-racistas visam punir a prática do racismo. Podemos destacar como principais normas desta natureza:

O artigo 5º, inciso XLII da Constituição de 1988 que torna a prática de racismo crime inafiançável e imprescritível.



A Lei 7716/1989 que regulamenta a Constituição estabelecendo várias condutas racistas passíveis de punição.

A lei 9459/1997 que cria no Código Penal (parágrafo §3º ao artigo 140) o crime de injúria racial.

Já as ações afirmativas são de toda natureza, indo desde a decretação do feriado do Dia da Consciência Negra em Estados e Municípios até a instituição das cotas raciais nas universidades e nos concursos públicos. Destacamos aqui as mais importantes leis que criaram ações afirmativas no Brasil:

Lei nº 10.639/2003 que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), tornando obrigatória a inclusão no currículo da rede de ensino da “História e Cultura Africana e Afro-Brasileira”;

Lei nº 10.678/2003 que criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPPIR);

Lei nº 11.096/2005 que criou o Programa Universidade para Todos – ProUni, pelo qual o Governo Federal fornece bolsas de estudos para afro-descendentes nas universidades privadas;

Decreto 4.886/2003 que institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR);

Decreto 4.885/03 que criou o Conselho Nacional de Políticas de Igualdade Racial, órgão colegiado e consultivo da SEPPPIR com a finalidade de propor e monitorar as políticas de promoção da Igualdade Racial;

Decreto 4.887/03 que trata da regulamentação dos direitos humanos das comunidades negras rurais, remanescentes de quilombos;

Decreto nº 6.872/2009 que aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Planapir).⁷

Por último ressaltamos a Lei 12.288/10 que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto é um micro-sistema jurídico que determina um conjunto de medidas para a redução das desigualdades raciais, especialmente nas áreas da educação, saúde, trabalho, cultura, moradia e segurança pública, dentre outros.

⁷ As leis e decretos aqui demonstrados não exaurem outros adotados pelo Governo Federal e demais entidades da Federação. Para se ter uma visão sobre as normas de ação afirmativa adotadas pelo Governo Federal vide o site <http://www.portaldaiigualdade.gov.br>.

4. Um olhar para o futuro

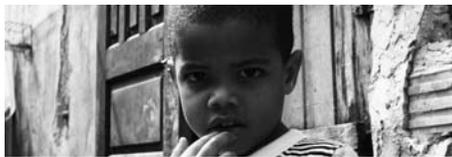
Racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas são fenômenos globais que afetam praticamente todas as nações. Não concernem apenas a um ou outro país, mas a toda a comunidade internacional. As formas, a intensidade e a ênfase com que se manifestam variam conforme o contexto sócio, político, histórico e cultural de cada sociedade e negá-los apenas contribui para aprofundar as cisões e conflitos deles recorrentes.

O Estado brasileiro acredita que o comprometimento da comunidade internacional com a promoção da igualdade é fundamental para a superação destes fenômenos. Nenhum país conseguirá, isoladamente, lidar de forma adequada com o tema. É necessário assegurar a cooperação, a troca de experiências e o debate intergovernamental constante, razão pela qual o Brasil busca fomentar e apoiar as iniciativas internacionais de promoção da igualdade. E tem se empenhado para manter a discriminação e intolerância como temas de pauta das organizações internacionais pertinentes, além de assegurar e fortalecer o compromisso internacional com a superação das desigualdades.

O fenômeno do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e das intolerâncias correlatas interfere na formulação das políticas públicas pelos Estados. Portanto a cooperação internacional deve promover o intercâmbio de experiências, a difusão de boas práticas, a assistência técnica internacional e potencializar a atuação dos Estados como agentes de promoção da igualdade. A maioria dos países americanos compartilha aspectos importantes da sua história, em especial no que tange à formação estratificada e excludente de suas sociedades, baseada na discriminação como elemento de manutenção das desigualdades econômicas, sociais e políticas. Os dilemas e desafios existentes para a superação das injustiças, consideradas as especificidades naturais, apresentam semelhanças consideráveis.

O Governo Brasileiro, desde a criação da SEPPPIR, vem dando passos significativos com o objetivo de ampliar as ações e obter resultados efetivos na redução da desigualdade racial no Brasil. O Estado brasileiro está disposto a, na medida dos recursos disponíveis, a oferecer cooperação técnica a outros Estados que tenham interesse em replicar quaisquer das políticas implantadas no Brasil. Igualmente, teria grata satisfação de conhecer boas práticas consagradas alhures e receber cooperação que auxiliasse o Governo a superar os desafios existentes para a superação das desigualdades. Nesta direção, gostaríamos de propor algumas ações que podem ser assumidas pela Organização dos Estados Americanos/OEA considerando o Ano Internacional dos Afro-descendentes:

1. Ampliar a divulgação das negociações do Grupo de Trabalho Encarregado da Elaboração do anteprojeto da Convenção Interamericana Contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância, visando aportes e sua rápida aprovação.



2. Estimular entre os países membros da OEA, projetos de cooperação e intercâmbio de boas práticas de inclusão social das populações historicamente discriminadas, em especial a população afro-descendente.

3. Fortalecer a Relatoria Especial sobre os Direitos dos Afro-descendentes e Contra a Discriminação Racial, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos visando reverter à invisibilidade em que se encontra a maior parte da população afro-descendente das Américas (constituída aproximadamente por 200 milhões de pessoas).

4. Apoiar projetos de pesquisa, elaboração e edição de material impresso e audiovisual referente à história dos afro-descendentes nos países americanos, dando visibilidade às lutas, estratégias e resistências dessas populações oriundas da diáspora africana; isso permitiria reconhecer o papel que desempenharam na construção das sociedades para as quais transportaram e recriaram ricas e milenares culturas, constituindo-se ainda, em força de trabalho sob a qual se erigiram os Estados da América.

5. Apoiar a Incorporação do tema afro-descendente nas políticas e programas da Organização dos Estados Americanos, como propõe o Departamento de Direito Internacional (DDI) da Secretaria de Assuntos Jurídicos da OEA, enfocando especificamente os seguintes pontos:

- A Elaboração e divulgação de relatórios que contenham indicadores e recomendações para uma política transversal da OEA sobre afro-descendentes;
- Apoio à participação de representantes afro-descendentes em reuniões regionais a fim de que possam elaborar recomendações aos órgãos políticos do Sistema Interamericano;
- Organização de seminários, como este, com especialistas destinados a analisar o trabalho da OEA sobre afro-descendentes e formular recomendações técnicas;
- Divulgação do tema afro-descendente por meio de cursos e seminários sobre Direito Internacional, fomentando a participação desse grupo minoritário nos mencionados eventos; e
- Elaboração de relatórios sobre padrões hemisféricos e legislação interna, políticas, melhores práticas e ações afirmativas relacionados ao tema afro-descendentes.

Entendemos que o desenvolvimento de políticas públicas de promoção da igualdade racial nas Américas é diretamente proporcional ao fortalecimento da cooperação continuada com países da África e da Diáspora Africana. O conhecimento da história das Américas passa necessariamente pelo conhecimento da história do continente africano. Neste sentido, a atuação da Organização dos Estados Americanos é fundamental e estratégica para a superação do racismo e construção de uma humanidade mais justa.

São estas as considerações que nós tínhamos a fazer.

Muito Obrigado.

Bibliografia

Guimarães, Antonio S. A. – Classes, Raças e Democracia – Editora 34 – São Paulo – 2002.

Brasil. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Exercício 2009 – Ano Base 2008

Brasil. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Plano Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Planapir – 2009.

Brasil. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Relatório de Gestão 2003-2006.

Brasil. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Documento de Posição do Brasil – Conferência Regional Preparatória a Conferência de Revisão de Durban - 2008





Conclusiones

Conclusiones del II Taller de Expertos/as en la Temática Afrodescendiente en las Américas

Roberto Rojas Dávila

Buenas tardes señoras y señores

Sin duda alguna hay un avance muy importante de la temática Afrodescendiente en la región. Hace unos años la misma no estaba en la agenda de la gran mayoría de los países de América Latina. Es después de la Conferencia de Durban - y esa es la importancia del aporte del Derecho Internacional al desarrollo de la temática Afrodescendiente – que empieza a posicionarse en las agendas de los países de la región paulatinamente.

Existen muchos puntos en común de las cuatro ponencias: el primero, es la importancia de la sociedad civil Afrodescendiente, ya que gracias a su lucha contra el racismo y a la reivindicación de sus derechos durante muchos años, ha permitido que sus aportes sean tomados en cuenta en instrumentos internacionales como la Declaración y Plan de Acción de Santiago y Durban, respectivamente.

El segundo, es que gracias al impulso de la sociedad civil Afrodescendiente y al compromiso político de los Estados, se crearon las denominadas Secretarías o Unidades de Equidad Racial, las cuales permitieron en primer lugar, la visibilidad de la problemática afrodescendiente en los respectivos países.

El tercero, es el énfasis que se dio en las ponencias al tema de la educación, en específico, a la importancia de la inclusión en las currículas educativas de la historia de África y la/os Afrodescendientes. Asimismo, se resaltó el escaso acceso a educación superior que tienen la/os Afrodescendientes.

El cuarto, es el destaque al papel de la/os jóvenes Afrodescendientes y la importancia de impulsar el liderazgo juvenil Afrodescendiente en los países.

El quinto, es la existencia de buenas prácticas en los países participantes en el taller, resaltando la importancia que pueden tener los intercambios de experiencias para mejorar y potenciar dichas buenas prácticas en los países de la región.

Asimismo, se identificaron puntos a ser trabajados, siendo el primero de ellos, la sensibilización de todos los actores, ya que la temática afrodescendiente no debe ser sólo un tema de interés de las personas afrodescendientes sino de la sociedad en general.

El segundo, es el problema de la implementación de los estándares de protección de Afrodescendientes existentes.

Existe un gran reto por delante, tomando como base los principios de la Organización de los Estados Americanos, se nos hace imposible hablar de sociedades democráticas sin la representación y la plena participación, libre y en igualdad de condiciones de las y los afrodescendientes en todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural en las Américas.

Finalmente, quiero agradecer a las y los expositores por aceptar nuestra invitación, así como a las y los participantes de este II Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas e invitarlos a seguir en contacto con nosotros y entre ellos, para seguir aportando al debate sobre la inclusión de millones de personas en nuestro continente.

¡Muchas gracias!





III. Anexos

Panamá

Principal Marco Jurídico Nacional sobre Afrodescendientes¹

**REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

**DECRETO EJECUTIVO No. 124
(de 27 de mayo de 2005)**

“Por el cual se crea la Comisión Especial para el establecimiento de una política gubernamental para la inclusión plena de la etnia negra panameña”

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que desde hace más de quinientos años, la etnia negra constituye una parte importante de la población del istmo.

Que su aporte al país en lo económico, cultural, político y social ha consolidado la nacionalidad y la identidad panameña.

Que es necesario establecer una política gubernamental mediante la cual se garantice la participación con igualdad y equidad, de la población afropanameña en la sociedad, según lo establece la “Declaración y Programa de Acción de la II Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia”, aprobada en Durban por los estados miembros de las Naciones Unidas.

¹ La legislación fue remitida por funcionarios de la Secretaría Nacional de la Etnia Negra para su publicación.

Que con la finalidad de fijar los lineamientos de dicha política, el Órgano Ejecutivo estima necesario la integración de una Comisión Especial en la cual tengan participación tanto miembros distinguidos de sectores organizados de la etnia negra panameña como representantes de las entidades gubernamentales vinculadas de manera directa con el desarrollo social y económico del país.

DECRETA:

Artículo 1. Créase la Comisión Especial para la elaboración de un plan de acción que garantice la inclusión plena de la etnia negra en la sociedad panameña.

Artículo 2. La Comisión estará integrada de la siguiente manera:

a. Representantes de los sectores organizados de la etnia negra:

1. Monseñor Uriah Ashley
2. Obispo Julio Murray
3. Eunice Meneses Araúz
4. Gerardo Maloney
5. Juan G. Fagette
6. Cecilia Moreno
7. Claral Richard
8. Sonia S. Brown
9. Melva Lowe de Goodin
10. Milford Peynado
11. Melvin Brown
12. Enrique E. Sánchez
13. Judy Dixon

b. Un (a) representante del Despacho de la Primera Dama del Ministerio de la Presidencia.

c. Un (a) representante del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.

d. Un (a) representante del Ministerio de Gobierno y Justicia.

e. Un (a) representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las funciones de los miembros de la Comisión serán ejercidas de manera ad-honorem.

Artículo 3. La Comisión tendrá el término de un (1) año para presentar al Órgano Ejecutivo el plan de acción al que se refiere el artículo 1 del presente Decreto.

Artículo 4. Este Decreto Ejecutivo empezará a regir desde su promulgación en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil cinco (2005).

MARTIN TORRIJOS ESPINO UBALDINO REAL
Presidente de la República Ministro de la Presidencia



MINISTERIO DE EDUCACION
DECRETO EJECUTIVO No. 89
(De 8 de mayo de 2006)

Por medio del cual se crea la Comisión organizadora de las actividades culturales orientadas a resaltar el Día de la Etnia Negra en Panamá.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que la educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin distinción de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas.

Que los principios de la educación panameña se orientan en la justicia social, que servirá de afirmación y fortalecimiento de la nacionalidad panameña.

Que en el desarrollo de los principios de la educación panameña, establecidos en la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, el Ministerio de Educación tendrá a su cargo todo lo relacionado con la educación y la cultura nacional.

Que el Ministerio de Educación tiene entre sus fines garantizar la educación de los panameños con actividades en defensa de la igualdad de los individuos, mediante el conocimiento y respeto de los derechos humanos, el desarrollo de la conciencia social a favor de la paz, la tolerancia y la concertación como medios de entendimiento social;

Que el Artículo 1 de la Ley 9 de 30 de mayo de 2000 declara el 30 de mayo de cada año Día Cívico y de Conmemoración de la Etnia Negra Nacional.

Que el Artículo 2 de la citada Ley establece que el Ministerio de Educación debe garantizar la conmemoración del día de la Etnia Negra Nacional.

Que para tales efectos se requiere crear una Comisión Institucional, responsable de garantizar el cumplimiento de esta función;

DECRETA:

ARTICULO 1: Créase la Comisión organizadora de las actividades culturales orientadas a resaltar el Día de la Etnia Negra en Panamá.

ARTICULO 2: La Comisión organizadora estará integrada de la siguiente forma:

- a. Un representante de la Dirección General de Educación.
- b. Un representante de la Dirección Nacional de Educación Inicial.
- c. Un representante de la Dirección Nacional de Educación Básica General.
- d. Un representante de la Dirección Nacional de Educación Media Académica.
- e. Un representante de la Dirección Nacional de Educación Profesional y Técnica.
- f. Un representante de la Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos.
- g. Un representante de la Dirección Nacional de Educación Particular.
- h. Un representante de la Dirección Nacional de Coordinación de Tercer Nivel de Enseñanza o Superior.

ARTICULO 3: La Comisión organizadora de las actividades culturales orientadas

a resaltar el Día de la Etnia Negra en Panamá, tendrá las siguientes funciones:

a. Planificar las actividades culturales en los centros educativos oficiales y particulares del país (Básica General, Media, Postmedia y Superior) tales como: concursos de oratoria, seminarios, capacitaciones, actos culturales, exposiciones, elaboración de murales, promoción de libros que resalten los aportes científicos, culturales, económicos y laborales de la Etnia Negra en Panamá.

b. Comunicar a las Direcciones Regionales de Educación, el programa de actividades culturales que se realizarán con motivo de esta celebración en los diversos centros educativos.

ARTICULO 4: Las Direcciones Regionales de Educación con el apoyo de los supervisores de su región, los directores de los centros escolares oficiales y particulares y la comunidad educativa, garantizarán el cumplimiento de estas actividades.

ARTICULO 5: El presente Decreto Ejecutivo empezará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

Dado en la Ciudad de Panamá a los ocho (8) días del mes de mayo de dos mil seis (2006).

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

MIGUEL ANGEL CAÑIZALES MARTIN TORRIJOS ESPINO
Ministro de Educación Presidente de la República



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO EJECUTIVO N° 116

(DE 29 DE MAYO DE 2007)

“Por el cual se crea el Consejo Nacional de la Etnia Negra”.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
En uso de sus facultades legales

CONSIDERANDO:

Que la etnia negra constituye parte de la comunidad panameña brindándole a la misma, elementos básicos de su cultura y organización social, los que han contribuido a singularizarnos como un pueblo diverso, multiétnico y pluricultural a la vez que abierto y amigable.

Que la Ley 19 de 30 de mayo de 2000 y el Decreto Ejecutivo 124 de 27 de mayo de 2005, han reconocido la lucha generacional de los miembros de la etnia negra por lograr la inclusión y la equidad, al sentar las bases para la implantación de espacios de discusión y análisis de los diversos problemas de ese segmento de la sociedad panameña.

Que mediante Decreto Ejecutivo 124 de 2005 se estableció una instancia gubernamental para atender específicamente las exigencias de la población afropanameña, al crear “la Comisión Especial para la elaboración de un plan de acción que garantice la inclusión plena de la etnia negra en la sociedad panameña”.

Que la Comisión Especial en cumplimiento de sus fines, propuso al Organismo Ejecutivo el Plan para la Inclusión Plena de la Etnia Negra Panameña, mismo del cual se desprende la necesidad de formalizar e institucionalizar los esfuerzos, tanto del sector público como el cívico-privado, en especial los sectores organizados de la etnia negra.

Que con el objeto de emprender acciones sistemáticas que contribuyan a difundir y conocer los aportes de la herencia y cultura afropanameña es indispensable crear dentro del Ejecutivo, una instancia de coordinación, asesoría, promoción e implantación efectiva de los planes que desarrolla la etnia negra.

DECRETA:

Artículo 1. Créase el Consejo Nacional de la Etnia Negra, adscrito al Ministerio de la Presidencia, como un organismo consultivo y asesor para la promoción y desarrollo de los mecanismos de reconocimiento e integración igualitaria de la etnia negra, vista ella como un segmento importante de la sociedad panameña.

Artículo 2. El Consejo Nacional de la Etnia Negra tendrá los siguientes fines y funciones:

Fines

- a) Contribuir al desarrollo integral la cultura de la etnia negra de Panamá.
- b) Servir de vehículo de formación y divulgación de la afropanameñidad.
- c) Dar a conocer las manifestaciones y aportes culturales de la etnia negra a nuestro país.
- d) Instar a las entidades públicas, por conducto del Ministerio de la Presidencia, a que en las normas jurídicas reglamentarias que se dicten y en los procedimientos administrativos, se cumpla con el principio de igualdad de oportunidades al acceso a los servicios públicos.

Funciones

- a) Estudiar los problemas fundamentales que influyen en la marginación de las personas afrodescendientes.
- b) Asesorar al Organo Ejecutivo en lo referente al cumplimiento y ejecución de las Políticas Públicas de reconocimiento y defensa de los valores de la etnia negra en Panamá.
- c) Recomendar al Organo Ejecutivo políticas y estrategias en materia de educación y capacitación de la población, en especial a los estudiantes de los tres niveles educativos de enseñanza, respecto de los valores culturales de los afropanameños.
- d) Promover el intercambio cultural necesario a fin de eliminar cualquier práctica discriminatoria contra la comunidad afropanameña o cualquiera de sus miembros.
- e) Sugerir al Organo Ejecutivo las medidas que fueren necesarias para asegurar la protección de la comunidad afropanameña contra cualquier acto discriminatorio.
- f) Revisar, actualizar y proponer al Organo Ejecutivo Políticas Nacionales sobre discriminación e igualdad de acceso a lugares y servicios públicos.
- g) Recomendar al Organos Ejecutivo las acciones concretas tendientes a mejorar la coordinación entre las diversas instituciones, grupos y organismos nacionales e internacionales que promuevan el desarrollo de los miembros de la etnia negra.
- h) Presentar a las diversas instancias correspondientes, propuestas de regulaciones para la promoción de la etnia negra.
- i) Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas y programas formuladas a favor de la etnia negra.

Artículo 3. El Consejo Nacional de la Etnia Negra estará integrado por diecisiete (17) miembros, quienes tendrán sus respetivos suplentes, los que los remplazaran en sus ausencias temporales o permanentes, hasta cumplirse el periodo de designación. El periodo de designación será de cuatro (4) años prorrogables por un periodo.

Los servicios que brinden los miembros del Consejo tendrán el carácter de ad-honorem y serán designados por el Organo Ejecutivo.



El Consejo estará integrado por trece (13) miembros representantes de la etnia negra y cuatro (4) de las siguientes entidades públicas:

- a) Ministerio de la Presidencia,
- b) Ministerio de Desarrollo Social,
- c) Ministerio de Gobierno y Justicia, y
- d) Ministerio de Economía y Finanzas

Designase como primeros integrantes del Consejo Nacional de la Etnia Negra a las siguientes personas en representantes de la sociedad civil:

1. Monseñor Uriah Ashley.
2. Obispo Julio Murray.
3. Eunice Meneses Araúz.
4. Gerardo Maloney.
5. Juan G. Fagette.
6. Cecilia Moreno.
7. Claral Richard.
8. Sonia S. Brown.
9. Melva Lowe de Goodin.
10. Milford Peynado.
11. Melvin Brown.
12. Enrique E. Sánchez.
13. Judy Dixon.

Artículo 4. El Consejo contará con una Presidencia la cual será rotativa entre sus miembros, por el período que el Consejo determine en su Reglamento Interno.

Artículo 5. Los asuntos sometidos al Consejo Nacional de la Etnia Negra serán adoptados por mayoría de los miembros presentes, aunque se requerirá la participación de por lo menos tres (3) de los representantes de las entidades públicas indicadas en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 6. El Consejo Nacional de la Etnia Negra contará con una Secretaría Ejecutiva adscrita al Ministerio de la Presidencia, la cual velará por la buena marcha de las reuniones y actividades del Consejo, darle seguimiento a los acuerdos y decisiones del Consejo y en términos generales, constituir soporte técnico y administrativo de la organización del Consejo.

Artículo 7. Este Decreto empezará a regir desde su promulgación en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 29 días del mes de mayo de dos mil siete (2007).

MARTIN TORRIJOS ESPINO UBALDINO REAL SOLIS
Presidente de la Republica Ministro de la Presidencia



LEY 16 DE 10 DE ABRIL DE 2002

Que regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos y dicta medidas para evitar la discriminación

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:

Artículo 1. La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios:

1. La prohibición de cualquier acto que denote alguna discriminación, exclusión, restricción o preferencia basada en el color, la raza, el sexo, la edad, la religión, la clase social, el nacimiento, las ideas políticas o filosóficas, o que menoscabe el goce o ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, así como de los derechos previstos en Convenciones Internacionales de Derechos Humanos o en documentos que tengan como finalidad promover el desarrollo de la dignidad del ser humano.
2. La obligación del Estado de promover la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por la República de Panamá mediante la Ley 49 de 1967.
3. La aplicación de la política del Estado sobre el derecho a la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.
4. La obligación del Estado de promover campañas de educación que fomenten el respeto a los Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República de Panamá, en especial los relacionados con la eliminación de cualquier forma de discriminación.
5. La promoción por el Estado panameño de medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole, para combatir cualquier tipo de discriminación.

Artículo 2: Esta Ley tiene los siguientes objetivos:

1. Desarrollar el artículo 19 de la Constitución Política.
2. Condenar la discriminación en cualquiera de sus formas, y tomar medidas efectivas para asegurar la protección contra actos discriminatorios.
3. Revisar la política del Estado sobre discriminación.
4. Capacitar a la población y promover el intercambio cultural necesario para eliminar cualquier práctica discriminatoria.

5. Adoptar las medidas necesarias para difundir en gran escala la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

6. Adoptar las medidas necesarias para que los distintos grupos de la sociedad, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y sectores excluidos, gocen de los derechos enunciados por la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Artículo 3: Para los efectos de la presente Ley, se entiende por discriminación cualquier acto que denote algún tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia basado en el color, la raza, el sexo o la orientación sexual, la edad, la religión, las discapacidades físicas, la clase social, el nacimiento, las ideas políticas o filosóficas, o que menoscabe el goce o ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, así como de los derechos previstos en Convenios Internacionales de Derechos Humanos o en documentos que tengan como finalidad promover el desarrollo de la dignidad del ser humano.

Artículo 4: El derecho de admisión es la facultad que tiene toda persona de tener acceso a cualquier establecimiento destinado al público, con fines lucrativos o no, a lugares dedicados a cualquier tipo de espectáculo o entretenimiento, o a locales destinados a la venta de bienes y servicios.

Artículo 5: La reserva del derecho de admisión es la facultad que tiene el propietario de cualquier establecimiento destinado al público, con fines lucrativos o no, de lugares dedicados a cualquier tipo de espectáculo o entretenimiento, o de locales destinados a la venta de bienes y servicios, de restringir la entrada a personas expresamente señaladas en el artículo siguiente.

Artículo 6: La reserva del derecho de admisión puede ser utilizada en los siguientes casos:

1. Cuando la persona sea menor de edad, en las discotecas y en establecimientos destinados a la venta de licor o a la presentación de espectáculos públicos destinados exclusivamente a personas mayores de edad.

2. Cuando la persona se encuentre en estado de embriaguez o intoxicada por drogas o estupefacientes de cualquier índole, o por sustancias que produzcan dependencia física y psíquica, como los narcóticos, fármacos y todos aquellos productos precursores y sustancias químicas esenciales que sirven para su elaboración, transformación o preparación, de conformidad con las disposiciones legales en materia de salud, convenios y acuerdos internacionales vigentes en la República de Panamá.



3. Cuando la persona porte arma de fuego, arma blanca o cualquier otro instrumento destinado al ataque o la defensa y pueda alterar el orden y la seguridad dentro del establecimiento, o que con anterioridad haya incurrido en estos actos.

4. Cuando la persona pretenda introducir drogas ilícitas o armas. Si dentro de un local se encuentra a una persona en actividad ilícita relacionada con drogas, además de la responsabilidad penal, debe ser retirada del respectivo local, al igual que la persona que realice actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

5. Cuando la persona que pretenda ingresar al establecimiento, se presente con vestimenta no acorde con el código de vestimenta previamente establecido por la empresa, certificado por la Comisión Nacional contra la Discriminación y fijado en lugar visible.

Artículo 7: Cualquier persona que impida la entrada en establecimientos a personas no comprometidas en el artículo anterior, cometerá acto de discriminación. La infracción a las disposiciones de esta Ley, será penada con multa de doscientos cincuenta balboas (B/. 250.00) a mil (B/. 1,000.00) al propietario del establecimiento, persona natural o jurídica o al representante legal, la primera vez. En caso de reincidencia con la misma persona, la multa será el doble de la primera. De existir una tercera discriminación con la misma persona, se cerrará el establecimiento hasta por cinco días. De existir una cuarta, se cancelará la licencia indefinidamente. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia.

Artículo 8: Se crea la Comisión Nacional contra la Discriminación para analizar la aplicación por parte de la República de Panamá de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y recomendar al Órgano Ejecutivo propuestas que permitan incorporar a la agenda del Estado el derecho a la no discriminación.

Artículo 9: La Comisión de que trata el artículo anterior estará integrada por:

1. El Defensor del Pueblo de la República de Panamá o un representante, quien la presidirá y convocará las reuniones.

2. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa o quien lo represente.

3. El Presidente de la Asociación de Propietarios de Bares y Discotecas de la República de Panamá o quien lo represente.

4. El Ministro de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia o quien lo represente.

5. Tres representantes de organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad promover la no discriminación en el país.

6. Un representante del Órgano Judicial.

7. Un representante de los pueblos indígenas.

8. Un representante de la etnia negra.

La Comisión Nacional contra la Discriminación dictará su propio reglamento interno, que deberá ser aprobado por la mayoría de sus miembros.

Artículo 10: Los miembros de la Comisión Nacional Contra la Discriminación no recibirán ningún tipo de remuneración del Estado por los servicios que presten en ejercicio de sus funciones

Artículo 11: El alcalde o la alcaldesa del respectivo distrito podrá solicitar la cooperación a la Policía Nacional y a la Policía Técnica Judicial, así como decretar inspecciones a los establecimientos comerciales, cuando lo considere, para comprobar que no existe discriminación.

Estas autoridades municipales velarán por el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 12: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un término no mayor de cuatro meses, contado a partir de su promulgación.

Artículo 13: Esta Ley entrará a regir desde su promulgación.
Comuníquese y cúmplase

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 6 días del mes de marzo del año dos mil dos

El Presidente Encargado, El secretario General
Rubén Arosemena Valdés, Edwin E. Cabrera U.

Órgano Ejecutivo Nacional - Presidencia de la República - Panamá, República de Panamá, 10 de Abril de 2002

Mireya Mosco
Presidente de la República

Aníbal Salas Céspedes
Ministro de Gobierno y Justicia



GACETA OFICIAL No. 25.287

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2005

ASAMBLEA NACIONAL

LEY No 11

(De 22 de abril de 2005)

Que prohíbe la discriminación laboral y adopta otras medidas

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. Se prohíbe la discriminación laboral, por razones de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Artículo 2. Se prohíbe la publicación, difusión o transmisión por cualquier medio, de ofertas de empleos remunerados que exijan una determinada edad a persona que se va a contratar.

Artículo 3. Los infractores de la presente Ley serán sancionados con multas que oscilan entre quinientos balboas (B/500.00) y mil balboas (B/1,000.00)

Artículo 4. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral será la entidad responsable de conocer las violaciones a esta Ley, y de aplicar las sanciones correspondientes.

Este Ministerio podrá actuar de oficio o mediante denuncia.

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Aprobada en tercer debate en el Palacio Justo Arosomena, ciudad de Panamá, a los 8 días del mes de marzo del año dos mil cinco.

El Presidente Encargado, El Secretario General.

RAUL E. RODRIGUEZ ARAUZ CARLOS JOSE SMITH S.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 22 DE ABRIL DE 2005.

MARTIN TORRIJOS ESPINO REYNALDO RIVERA

Presidente de la República Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral





III. Anexos

Brasil

Principal Marco Jurídico Nacional sobre Afrodescendientes¹

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

¹ La legislación fue descargada de la página oficial de la Secretaria de Políticas de Promoción de Igualdad Racial (<http://www.seppir.gov.br>) a sugerencia del expositor. Los subrayados y puntos son propios de la legislación brasilera.

**Presidência da República
Subchefia para Assuntos Jurídicos**

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989.

Mensagem de veto

Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

~~Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor:~~

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

Art. 2º (Vetado).

Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica: (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores; (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional; (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

§ 2º Ficarà sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou



qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Art. 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau.

Pena: reclusão de três a cinco anos.

Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um terço).

Art. 7º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar.

Pena: reclusão de três a cinco anos.

Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes sociais abertos ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos:

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Art. 15. (Vetado).

Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.

Art. 17. (Vetado).

Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Art. 19. (Vetado).

~~Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional. (Artigo incluído pela Lei nº 8.081, de 21.9.1990) Pena: reclusão de dois a cinco anos. § 1º Incorre na mesma pena quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.882, de 3.6.1994) § 2º Poderá o juiz determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: (Parágrafo renumerado pela Lei nº 8.882, de 3.6.1994) I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo; II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. § 3º Constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. (Parágrafo renumerado pela Lei nº 8.882, de 3.6.1994)~~

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)



Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas.

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerado pela Lei nº 8.081, de 21.9.1990)

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerado pela Lei nº 8.081, de 21.9.1990)

Brasília, 5 de janeiro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.

JOSÉ SARNEY
Paulo Brossard

Este texto não substitui o publicado no D.O.U de 6.1.1989

**Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos**

LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997.

Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.”

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.”

Art. 2º O art. 140 do Código Penal fica acrescido do seguinte parágrafo:



“Art. 140.
.....

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem:

Pena: reclusão de um a três anos e multa.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 1º da Lei nº 8.081, de 21 de setembro de 1990, e a Lei nº 8.882, de 3 de junho de 1994.

Brasília, 13 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.5.1997

**Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos**

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.

Mensagem de veto

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.

§ 3º (VETADO)”

“Art. 79-A. (VETADO)”

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.1.2003



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI No 10.678, DE 23 DE MAIO DE 2003.

Conversão da MPv nº 111, de 2003

Cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 111, de 2003, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Eduardo Siqueira Campos, Segundo Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada, como órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 2º À Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial compete assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial, na formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância, na articulação, promoção e acompanhamento da execução dos programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação da promoção da igualdade racial, na formulação, coordenação e acompanhamento das políticas transversais de governo para a promoção da igualdade racial, no planejamento, coordenação da execução e avaliação do Programa Nacional de Ações Afirmativas e na promoção do acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e definição de ações públicas que visem o cumprimento dos acordos, convenções e outros instrumentos congêneres assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos à promoção da igualdade e de combate à discriminação racial ou étnica, tendo como estrutura básica o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, o Gabinete e até três Subsecretarias. (Redação dada pela Medida Provisória nº 483, de 2010). (Revogado pela Lei nº 12.314, de 2010)

Art. 3º O CNPIR será presidido pelo titular da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, e terá a sua composição, competências e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo, a ser editado até 31 de agosto de 2003.

Parágrafo único. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, constituirá, no prazo de noventa dias, con-

tado da publicação desta Lei, grupo de trabalho integrado por representantes da Secretaria Especial e da sociedade civil, para elaborar proposta de regulamentação do CNPIR, a ser submetida ao Presidente da República.

~~Art. 4º Ficam criados, na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, um cargo de natureza especial de Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e um cargo de Secretário-Adjunto, código DAS 101.6. Art. 4º Fica criado, na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República um cargo de Secretário-Adjunto, código DAS 101.6. (Redação dada pela Medida Provisória nº 419, de 2008)~~

Art. 4º Fica criado, na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, 1(um) cargo de Secretário-Adjunto, código DAS 101.6. (Redação dada pela Lei nº 11.693, de 2008)

~~Parágrafo único. O cargo de natureza especial referido no caput terá prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes ao de Ministro de Estado e a remuneração de R\$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais). (Revogado pela Medida Provisória nº 419, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.693, de 2008)~~

~~Art. 4º-A. Fica transformado o cargo de Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. (Incluído pela Medida Provisória nº 419, de 2008)~~

Art. 4º-A. Fica transformado o cargo de Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. (Incluído pela Lei nº 11.693, de 2008)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 23 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Segundo Vice-Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, no exercício da Presidência

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.5.2003



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.885, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003.

Vide texto compilado

Dispõe sobre a composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 3o da Lei no 10.678, de 23 de maio de 2003,

DECRETA:

CAPITULO I

DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA

Art. 1º O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, órgão colegiado de caráter consultivo e integrante da estrutura básica da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, criado pela Lei no 10.678, de 23 de maio de 2003, tem por finalidade propor, em âmbito nacional, políticas de promoção da igualdade racial com ênfase na população negra e outros segmentos étnicos da população brasileira, com o objetivo de combater o racismo, o preconceito e a discriminação racial e de reduzir as desigualdades raciais, inclusive no aspecto econômico e financeiro, social, político e cultural, ampliando o processo de controle social sobre as referidas políticas.

Art. 2º Ao CNPIR compete:

~~I - participar na elaboração de critérios e parâmetros para a formulação e implementação de metas e prioridades para assegurar as condições de igualdade à população negra e de outros segmentos étnicos da população brasileira, inclusive na articulação da proposta orçamentária da União;~~

I - participar na elaboração de critérios e parâmetros para a formulação e implementação de metas e prioridades para assegurar as condições de igualdade à população negra e de outros segmentos étnicos da população brasileira; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

II - propor estratégias de acompanhamento, avaliação e fiscalização, bem como a participação no processo deliberativo de diretrizes das políticas de promoção da igualdade racial, fomentando a inclusão da dimensão racial nas políticas públicas desenvolvidas em âmbito nacional;

III - apreciar anualmente a proposta orçamentária da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e sugerir prioridades na alocação de recursos;

IV - apoiar a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na articulação com outros órgãos da administração pública federal e os governos estadual, municipal e do Distrito Federal;

~~V - recomendar a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a realidade da situação da população negra e de outros segmentos étnicos da população brasileira, com vistas a contribuir na elaboração de propostas de políticas públicas que visem à promoção da igualdade racial e à eliminação de todas as formas de preconceito e discriminação; VI - propor a realização de conferências nacionais de promoção da igualdade racial, bem como participar de eventos que tratem de políticas públicas de interesse da população negra e de outros segmentos étnicos da população brasileira;~~

V - apresentar sugestões para a elaboração do planejamento plurianual do Governo Federal, o estabelecimento de diretrizes orçamentárias e a alocação de recursos no Orçamento Anual da União, visando subsidiar decisões governamentais relativas à implementação de ações de promoção da igualdade racial; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

VI - propor a realização e acompanhar o processo organizativo da conferência nacional de promoção da igualdade racial, bem como participar de eventos que tratem de políticas públicas de interesse da população negra e de outros segmentos étnicos da população brasileira; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

VII - zelar pelas deliberações das conferências nacionais de promoção da igualdade racial;

~~VIII - propor o desenvolvimento de programas e projetos de capacitação sobre as relações raciais no âmbito da administração pública; IX - articular-se com órgãos e entidades públicos e privados, não representados no CNPIR, visando fortalecer o intercâmbio para a promoção da igualdade racial; X - articular-se com as entidades e organizações do movimento social negro e de outros segmentos étnicos da população brasileira, conselhos estaduais e municipais da comunidade negra, bem como de outros conselhos setoriais para ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns para a implementação de ações da política de igualdade racial; XI - propor, em parceria com organismos governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais, a identificação de sistemas de indicadores, no sentido de estabelecer metas e procedimentos, com base nesses índices, para monitorar a aplicação das atividades relacionadas com a promoção da igualdade racial; XII - zelar pelos direitos culturais da população negra, especialmente pela preservação da memória e das tradições africanas e afro-brasileiras, bem como pela diversidade cultural, constitutiva da formação histórica e social do povo brasileiro; XIII - zelar, acompanhar e propor medidas de defesa de direitos de indivíduos e grupos étnico raciais afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância; XIV -~~



proponer a atualização da legislação relacionada com as atividades de promoção da igualdade racial;

VIII - acompanhar, analisar e apresentar sugestões em relação ao desenvolvimento de programas e ações governamentais com vistas à implementação de ações de promoção da igualdade racial; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

IX - articular-se com órgãos e entidades públicas ou privadas, especialmente aqueles que tenham como objetivo a promoção, o desenvolvimento e a implementação de ações de igualdade racial, objetivando ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns para a implementação da política de igualdade racial e o fortalecimento do processo de controle social; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

X - zelar pelos direitos culturais da população negra, especialmente pela preservação da memória e das tradições africanas e afro-brasileiras, bem como dos demais segmentos étnicos constitutivos da formação histórica e social do povo brasileiro; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

XI - zelar, acompanhar e propor medidas de defesa de direitos de indivíduos e grupos étnico-raciais afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

XII - propor a atualização da legislação relacionada com as atividades de promoção da igualdade racial; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

XIII - definir suas diretrizes e programas de ação; e (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

XIV - elaborar seu regimento interno e decidir sobre as alterações propostas por seus membros. (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

XV - definir suas diretrizes e programas de ação; e

XVI - elaborar o regimento interno e decidir sobre as alterações propostas por seus membros.

Parágrafo único. Fica facultado ao CNPIR propor a realização de seminários ou encontros regionais sobre temas constitutivos de sua agenda, bem como estudos sobre a definição de convênios na área da promoção da igualdade racial a serem firmados pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial com organismos nacionais e internacionais públicos e privados.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 3º O CNPIR tem a seguinte composição: I - Ministros de Estado e Secretários Especiais, a seguir indicados: a) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que o presidirá; b) da Educação; c) da Saúde; d) do Desenvolvimento Agrário; e) do Trabalho e Emprego; f) da Justiça; g) das Cidades; h) da Ciência e Tecnologia; i) da Assistência Social; j) do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; (Redação dada pelo Decreto nº 5.265, de 2004) j) do Meio Ambiente; l) da Integração Nacional; m) dos Esportes; n) das Relações Exteriores; o) do Planejamento Orçamento e Gestão; p) Chefe da Casa Civil da Presidência da República; q) Chefe do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome; r) de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; e s) dos Direitos Humanos da Presidência da República; q) de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; (Redação dada pelo Decreto nº 5.265, de 2004) r) dos Direitos Humanos da Presidência da República; e (Redação dada pelo Decreto nº 5.265, de 2004) s) da Cultura; (Redação dada pelo Decreto nº 5.265, de 2004) t) da Cultura; (Incluído pelo Decreto nº 4.919, de 17.12.2003) II - dezenove representantes de entidades da sociedade civil organizada; e H - vinte representantes de entidades da sociedade civil organizada; e (Redação dada pelo Decreto nº 4.919, de 17.12.2003) III - três personalidades notoriamente reconhecidas no âmbito das relações raciais: § 1º O titular da Fundação Cultural Palmares participará, como convidado, em caráter permanente das reuniões do CNPIR. § 2º Os Ministros de Estado e os Secretários Especiais, integrantes do CNPIR, indicarão seus respectivos suplentes. § 3º Os membros de que trata o inciso II, e seus respectivos suplentes, indicados pelos titulares das entidades representadas, serão designados pelo Presidente da República.

Art. 3º O CNPIR é integrado por quarenta e quatro membros designados pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, com a seguinte composição: (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

I - vinte e dois representantes do Poder Público Federal, sendo um de cada um dos órgãos a seguir descritos, indicados com respectivos suplentes pelos seus dirigentes máximos: (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

a) Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que o presidirá; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

b) Ministério da Educação; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

c) Ministério da Saúde; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

d) Ministério do Desenvolvimento Agrário; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)



- e) Ministério do Trabalho e Emprego; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- f) Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- g) Ministério das Cidades; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- h) Ministério da Ciência e Tecnologia; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- i) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- j) Ministério do Meio Ambiente; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- l) Ministério da Integração Nacional; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- m) Ministério dos Esportes; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- n) Ministério das Relações Exteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- o) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- p) Casa Civil da Presidência da República; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- q) Ministério da Cultura; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- r) Ministério das Comunicações; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- s) Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- t) Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- u) Secretaria-Geral da Presidência da República; (Incluído pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- v) Fundação Cultural Palmares; e (Incluído pelo Decreto nº 6.509, de 2008)
- x) Fundação Nacional do Índio; (Incluído pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

II - dezenove representantes de entidades da sociedade civil de caráter nacional, titulares e suplentes, indicados a partir de processo seletivo; e (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

III - três personalidades notoriamente reconhecidas no âmbito das relações raciais. (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

§ 1º O processo seletivo previsto no inciso II será aberto a todas as entidades cuja finalidade seja relacionada às políticas de igualdade racial, e as vagas serão preenchidas a partir de critérios objetivos previamente definidos em edital expedido pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

§ 2º Os integrantes a que se refere o inciso III, titulares exclusivos de seus mandatos, serão indicados pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

§ 3º O mandato dos integrantes do CNPIR de que tratam os incisos II e III será de dois anos, permitida uma única recondução. (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

~~§ 4º Os membros de que trata o inciso III, titulares exclusivos de seus mandatos, serão designados pelo Presidente da República.~~

~~§ 5º Poderão ser convidados a participar das reuniões do CNPIR, a juízo do seu Presidente, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicos e privados, dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como outros técnicos, sempre que da pauta constar temas de suas áreas de atuação.~~

~~§ 6º Nos impedimentos, por motivos justificados, dos membros titulares, serão convocados os seus suplentes.~~

~~§ 7º Manifestada a necessidade, os membros do CNPIR poderão se fazer acompanhar de um assessor técnico nas suas reuniões.~~

~~§ 8º Os membros de que tratam os incisos II e III exercerão mandato de dois anos, permitida uma única recondução.~~

Art. 4º Os membros referidos nos incisos II e III do art. 3º deste Decreto poderão perder o mandato, antes do prazo de dois anos, nos seguintes casos:

I - por renúncia;

II - pela ausência imotivada em três reuniões consecutivas do CNPIR; e

III - pela prática de ato incompatível com a função de conselheiro, por decisão da maioria absoluta dos membros do CNPIR.

Parágrafo único. No caso de perda do mandato, será designado novo conselheiro para a titularidade da função.



Art. 5º As reuniões ordinárias do CNPIR, ressalvadas as situações de excepcionalidade, deverão ser convocadas com antecedência mínima de sete dias úteis, com pauta previamente comunicada aos seus integrantes.

Art. 6º O CNPIR formalizará suas deliberações por meio de resoluções, que serão publicadas no Diário Oficial da União.

~~Art. 7º O CNPIR poderá instituir grupos temáticos e comissões, de caráter permanente ou temporário, destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas específicos, a serem submetidos à sua composição plenária, definindo, no ato de criação desses colegiados, seus objetivos específicos, sua composição e prazo para conclusão dos trabalhos. § 1º Sempre que possível, os grupos temáticos e as comissões serão coordenados por representantes das populações ou segmentos étnicos de que tratam. § 2º O CNPIR poderá convidar para participar dos grupos temáticos e das comissões representantes de órgãos e entidades públicos e privados e dos Poderes Legislativo e Judiciário.~~

Art. 7º O CNPIR poderá instituir grupos temáticos e comissões, de caráter permanente ou temporário, destinados à elaboração de estudos e propostas que serão submetidos à apreciação do Conselho. (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

§ 1º O ato de criação de grupo temático ou comissão deverá especificar seus objetivos, composição e o prazo para a conclusão dos trabalhos ou apresentação de relatórios periódicos. (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

§ 2º O CNPIR poderá convidar técnicos, especialistas, representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas para acompanhar e participar dos trabalhos dos grupos temáticos e comissões. (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

Art. 8º São atribuições do Presidente do CNPIR:

I - convocar e presidir as reuniões;

II - solicitar ao CNPIR a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse público;

III - firmar as atas das reuniões; e

IV - constituir e organizar o funcionamento dos grupos temáticos e das comissões e convocar as respectivas reuniões.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º Poderão assistir as reuniões ordinárias ou extraordinárias do CNPIR, bem como dos seus grupos temáticos e comissões, cidadãos convidados pelo Presidente ou por deliberação majoritária dos membros do colegiado, ou ainda, respectivamente, pelo coordenador do grupo ou da comissão.

Art. 10. A participação nas atividades do CNPIR, dos grupos temáticos e das comissões será considerada função relevante e não será remunerada.

Parágrafo único. Será expedido pelo CNPIR aos interessados, quando requerido, certificado de participação nas atividades do conselho, dos grupos temáticos e das comissões.

Art. 11. O regimento interno do CNPIR será aprovado por resolução, e suas posteriores alterações deverão ser formalizadas ao Presidente do Conselho, que as submeterá à decisão do colegiado.

~~Art. 12. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial submeterá ao Presidente da República, no prazo de até quarenta e cinco dias, a contar da publicação deste Decreto, os nomes dos membros do CNPIR a que se referem os incisos II e III do art. 3º deste Decreto.~~

Art. 12. A designação dos membros para a composição do CNPIR para o biênio 2008 a 2010 será efetuada mediante ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a ser publicado até o final do mês de agosto de 2008. (Redação dada pelo Decreto nº 6.509, de 2008)

Art. 13. O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do CNPIR, dos grupos temáticos e das comissões serão prestados pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 14. Para o cumprimento de suas funções, o CNPIR contará com recursos orçamentários e financeiros consignados no orçamento da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 15. As dúvidas e os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelo Presidente do CNPIR, ad referendum do Colegiado.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Dirceu de Oliveira e Silva

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.11.2003



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.886, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003.

Institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PNPIR e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição e

Considerando que o Estado deve redefinir o seu papel no que se refere à prestação dos serviços públicos, buscando traduzir a igualdade formal em igualdade de oportunidades e tratamento;

Considerando que compete ao Estado a implantação de ações, norteadas pelos princípios da transversalidade, da participação e da descentralização, capazes de impulsionar de modo especial segmento que há cinco séculos trabalha para edificar o País, mas que continua sendo o alvo predileto de toda sorte de mazelas, discriminações, ofensas a direitos e violências, material e simbólica;

Considerando que o Governo Federal tem o compromisso de romper com a fragmentação que marcou a ação estatal de promoção da igualdade racial, incentivando os diversos segmentos da sociedade e esferas de governo a buscar a eliminação das desigualdades raciais no Brasil;

Considerando que o Governo Federal, ao instituir a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, definiu os elementos estruturais e de gestão necessários à constituição de núcleo formulador e coordenador de políticas públicas e articulador dos diversos atores sociais, públicos e privados, para a consecução dos objetivos de reduzir, até sua completa eliminação, as desigualdades econômico-raciais que permeiam a sociedade brasileira;

Considerando que o Governo Federal pretende fornecer aos agentes sociais e instituições conhecimento necessário à mudança de mentalidade para eliminação do preconceito e da discriminação raciais para que seja incorporada a perspectiva da igualdade racial;

Considerando-se que foi delegada à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial a responsabilidade de fortalecer o protagonismo social de segmentos específicos, garantindo o acesso da população negra e da sociedade em geral a informações e idéias que contribuam para alterar a mentalidade coletiva relativa ao padrão das relações raciais estabelecidas no Brasil e no mundo;

Considerando os princípios contidos em diversos instrumentos, dentre os quais se destacam:

- a Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação, que define a discriminação racial como “toda exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha como objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico e social”;

- o documento Brasil sem Racismo, elaborado para o programa de governo indicando a implementação de políticas de promoção da igualdade racial nas áreas do trabalho, emprego e renda, cultura e comunicação, educação e saúde, terras de quilombos, mulheres negras, juventude, segurança e relações internacionais;

- o Plano de Ação de Durban, produto da III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, no qual governos e organizações da sociedade civil, de todas as partes do mundo, foram conclamados a elaborar medidas globais contra o racismo, a discriminação, a intolerância e a xenofobia; e

Considerando, por derradeiro, que para se romper com os limites da retórica e das declarações solenes é necessária a implementação de ações afirmativas, de igualdade de oportunidades, traduzidas por medidas tangíveis, concretas e articuladas;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PNPIR, contendo as propostas de ações governamentais para a promoção da igualdade racial, na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 2º A PNPIR tem como objetivo principal reduzir as desigualdades raciais no Brasil, com ênfase na população negra.

Art. 3º A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial fica responsável pela coordenação das ações e a articulação institucional necessárias à implementação da PNPIR.

Parágrafo único. Os órgãos da administração pública federal prestarão apoio à implementação da PNPIR.

Art. 4º As despesas decorrentes da implementação da PNPIR correrão à conta de dotações orçamentárias dos respectivos órgãos participantes.

Art. 5º Os procedimentos necessários para a execução do disposto no art. 1º deste Decreto serão normatizados pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.



Brasil
Principal Marco Jurídico Nacional
sobre Afrodescendientes

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 2003; 182º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Dirceu de Oliveira e Silva

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.11.2003

ANEXO

POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

I - OBJETIVO GERAL

- Redução das desigualdades raciais no Brasil, com ênfase na população negra, mediante a realização de ações exequíveis a longo, médio e curto prazos, com reconhecimento das demandas mais imediatas, bem como das áreas de atuação prioritária.

II - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Defesa de direitos
- Afirmação do caráter pluriétnico da sociedade brasileira.
- Reavaliação do papel ocupado pela cultura indígena e afro-brasileira, como elementos integrantes da nacionalidade e do processo civilizatório nacional.
 - Reconhecimento das religiões de matriz africana como um direito dos afro-brasileiros.
- Implantação de currículo escolar que reflita a pluralidade racial brasileira, nos termos da Lei 10.639/2003.
- Tombamento de todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, de modo a assegurar aos remanescentes das comunidades dos quilombos a propriedade de suas terras.
- • Implementação de ações que assegurem de forma eficiente e eficaz a efetiva proibição de ações discriminatórias em ambientes de trabalho, de educação, respeitando-se a liberdade de crença, no exercício dos direitos culturais ou de qualquer outro direito ou garantia fundamental.
 - • Ação afirmativa
 - • Eliminação de qualquer fonte de discriminação e desigualdade raciais direta ou indireta, mediante a geração de oportunidades.
 - • Articulação temática de raça e gênero
 - • Adoção de políticas que objetivem o fim da violação dos direitos humanos.

III - PRINCÍPIOS

Transversalidade

- Pressupõe o combate às desigualdades raciais e a promoção da igualdade racial como premissas e pressupostos a serem considerados no conjunto das políticas de governo.



- As ações empreendidas têm a função de sustentar a formulação, a execução e o monitoramento da política de promoção de igualdade racial, de modo que as áreas de interesse imediato, agindo sempre em parceria, sejam permeadas com o intuito de eliminar as desvantagens de base existentes entre os grupos raciais.

Descentralização

- Articulação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o combate da marginalização e promoção da integração social dos setores desfavorecidos.
- Apoio político, técnico e logístico para que experiências de promoção da igualdade racial, empreendidas por Municípios, Estados ou organizações da sociedade civil, possam obter resultados exitosos, visando planejamento, execução, avaliação e capacitação dos agentes da esfera estadual ou municipal para gerir as políticas de promoção de igualdade racial.

Gestão democrática

- Propiciar que as instituições da sociedade assumam papel ativo, de protagonista na formulação, implementação e monitoramento da política de promoção de igualdade racial.
- Estimular as organizações da sociedade civil na ampliação da consciência popular sobre a importância das ações afirmativas, de modo a criar sólida base de apoio social.
- Participação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, composto por representantes governamentais e da sociedade civil, na definição das prioridades e rumos da política de promoção de igualdade racial, bem como potencializar os esforços de transparência.

IV - DIRETRIZES

Fortalecimento institucional

- Empenho no aperfeiçoamento de marcos legais que dêem sustentabilidade às políticas de promoção de igualdade racial e na consolidação de cultura de planejamento, monitoramento e avaliação.
- Adoção de estratégias que garantam a produção de conhecimento, informações e subsídios, bem como de condições técnicas, operacionais e financeiras para o desenvolvimento de seus programas.

Incorporação da questão racial no âmbito da ação governamental

- Estabelecimento de parcerias entre a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, os Ministérios e demais órgãos federais, visando garantir a inserção da perspectiva da promoção da igualdade racial em todas as políticas governamentais, tais como, saúde, educação, desenvolvimento agrário,

segurança alimentar, segurança pública, trabalho, emprego e renda, previdência social, direitos humanos, assistência social, dentre outras.

- Estabelecimento de parcerias entre a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e os diferentes entes federativos, visando instituir o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

Consolidação de formas democráticas de gestão das políticas de promoção da igualdade racial

- Fomento à informação da população brasileira acerca dos problemas derivados das desigualdades raciais, bem como das políticas implementadas para eliminar as referidas desigualdades, por intermédio da mídia, da promoção de campanhas nacionais de combate à discriminação, difundindo-se os resultados de experiências exitosas no campo da promoção da igualdade racial.
- Estimulo à criação e à ampliação de fóruns e redes que não só participem da implementação das políticas de promoção da igualdade racial como também de sua avaliação em todos os níveis.

Melhoria da qualidade de vida da população negra

- Inclusão social e ações afirmativas.
- Instituição de políticas específicas com objetivo de incentivar as oportunidades dos grupos historicamente discriminados, por meio de tratamento diferenciado.

Inserção da questão racial na agenda internacional do governo brasileiro

- Participação do governo brasileiro na luta contra o racismo e a discriminação racial, em todos os fóruns e ações internacionais.

V - AÇÕES

- Implementação de modelo de gestão da política de promoção da igualdade racial, que compreenda conjunto de ações relativas à qualificação de servidores e gestores públicos, representantes de órgãos estaduais e municipais e de lideranças da sociedade civil.
- Criação de rede de promoção da igualdade racial envolvendo diferentes entes federativos e organizações de defesa de direitos.
- Fortalecimento institucional da promoção da igualdade racial.
- Criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

- Aperfeiçoamento dos marcos legais.

- Apoio às comunidades remanescentes de quilombos.
- Incentivo ao protagonismo da juventude quilombola.



- Apoio aos projetos de etnodesenvolvimento das comunidades quilombolas.
- Desenvolvimento institucional em comunidades remanescentes de quilombos.
- Apoio sociocultural a crianças e adolescentes quilombolas.
- Incentivo à adoção de políticas de cotas nas universidades e no mercado de trabalho.
- Incentivo à formação de mulheres jovens negras para atuação no setor de serviços.
- Incentivo à adoção de programas de diversidade racial nas empresas.
- Apoio aos projetos de saúde da população negra.
- Capacitação de professores para atuar na promoção da igualdade racial.
- Implementação da política de transversalidade nos programas de governo.
- Ênfase à população negra nos programas de desenvolvimento regional.
- Ênfase à população negra nos programas de urbanização e moradia.
- Incentivo à capacitação e créditos especiais para apoio ao empreendedor negro.
- Celebração de acordos de cooperação no âmbito da Alca e Mercosul.
- Incentivo à participação do Brasil nos fóruns internacionais de defesa dos direitos humanos.
 - Celebração de acordos bilaterais com o Caribe, países africanos e outros de alto contingente populacional de afro-descendentes.
- Realização de censo dos servidores públicos negros.
- Identificação do IDH da população negra.
- Construção do mapa da cidadania da população negra no Brasil.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003.

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição e de acordo com o disposto no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

DECRETA:

Art. 1º Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto.

Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

§ 1º Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade.

§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural.

§ 3º Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental.

Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



§ 1º O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, dentro de sessenta dias da publicação deste Decreto.

§ 2º Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, organizações não-governamentais e entidades privadas, observada a legislação pertinente.

§ 3º O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por requerimento de qualquer interessado.

§ 4º A autodefinição de que trata o § 1o do art. 2o deste Decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento.

Art. 4º Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada.

Art. 5º Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto neste Decreto.

Art. 6º Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados.

Art. 7º O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital por duas vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo, contendo as seguintes informações:

- I - denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades dos quilombos;
- II - circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel;
- III - limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a serem tituladas; e

IV - títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação.

§ 1º A publicação do edital será afixada na sede da prefeitura municipal onde está situado o imóvel.

§ 2º O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área delimitada.

Art. 8º Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de trinta dias, opinar sobre as matérias de suas respectivas competências:

I - Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN;

II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

III - Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

IV - Fundação Nacional do Índio - FUNAI;

V - Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional;

VI - Fundação Cultural Palmares.

Parágrafo único. Expirado o prazo e não havendo manifestação dos órgãos e entidades, dar-se-á como tácita a concordância com o conteúdo do relatório técnico.

Art. 9º Todos os interessados terão o prazo de noventa dias, após a publicação e notificações a que se refere o art. 7º, para oferecer contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes.

Parágrafo único. Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o INCRA concluirá o trabalho de titulação da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.

Art. 10. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidirem em terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título.

Art. 11. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação



Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do Estado.

Art. 12. Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidem sobre terras de propriedade dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o INCRA encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação.

Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos título de domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber.

§ 1º Para os fins deste Decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel de propriedade particular, operando as publicações editalícias do art. 7º efeitos de comunicação prévia.

§ 2º O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante levantamento da cadeia dominial do imóvel até a sua origem.

Art. 14. Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os dispositivos administrativos e legais para o reassentamento das famílias de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber.

Art. 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa dos interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da titulação das suas terras.

Art. 16. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a Fundação Cultural Palmares garantirá assistência jurídica, em todos os graus, aos remanescentes das comunidades dos quilombos para defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou órgãos que prestem esta assistência.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares prestará assessoramento aos órgãos da Defensoria Pública quando estes órgãos representarem em juízo os interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos do art. 134 da Constituição.

Art. 17. A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2º,

caput, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade.

Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas associações legalmente constituídas.

Art. 18. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, encontrados por ocasião do procedimento de identificação, devem ser comunicados ao IPHAN.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o processo para fins de registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento e preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Art. 19. Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no prazo de noventa dias, plano de etnodesenvolvimento, destinado aos remanescentes das comunidades dos quilombos, integrado por um representante de cada órgão a seguir indicado:

I - Casa Civil da Presidência da República;

II - Ministérios:

a) da Justiça;

b) da Educação;

c) do Trabalho e Emprego;

d) da Saúde;

e) do Planejamento, Orçamento e Gestão;

f) das Comunicações;

g) da Defesa;

h) da Integração Nacional;

i) da Cultura;

j) do Meio Ambiente;

k) do Desenvolvimento Agrário;

l) da Assistência Social;



m) do Esporte;

n) da Previdência Social;

o) do Turismo;

p) das Cidades;

III - do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome;

IV - Secretarias Especiais da Presidência da República:

a) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;

b) de Aqüicultura e Pesca; e

c) dos Direitos Humanos.

§ 1º O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

§ 2º Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos órgãos referidos nos incisos I a IV e designados pelo Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

§ 3º A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 20. Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de financiamento, destinados à realização de suas atividades produtivas e de infra-estrutura.

Art. 21. As disposições contidas neste Decreto incidem sobre os procedimentos administrativos de reconhecimento em andamento, em qualquer fase em que se encontrem.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares e o INCRA estabelecerão regras de transição para a transferência dos processos administrativos e judiciais anteriores à publicação deste Decreto.

Art. 22. A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido pelo INCRA far-se-ão sem ônus de qualquer espécie, independentemente do tamanho da área.

Parágrafo único. O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis titulados em favor dos remanescentes das comunidades dos quilombos em formulários específicos que respeitem suas características econômicas e culturais.

Art. 23. As despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas neste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual para tal finalidade, observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Revoga-se o Decreto no 3.912, de 10 de setembro de 2001.

Brasília, 20 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Gilberto Gil
Miguel Soldatelli Rossetto
José Dirceu de Oliveira e Silva

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.11.2003



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI No 11.096, DE 13 DE JANEIRO DE 2005.

Mensagem de veto

Regulamento

Conversão da MPv nº 213, de 2004

Institui o Programa Universidade para Todos -PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior; altera a Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa Universidade para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos.

§ 1º A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio).

§ 2º As bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), cujos critérios de distribuição serão definidos em regulamento pelo Ministério da Educação, serão concedidas a brasileiros não-portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-mínimos, mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação.

§ 3º Para os efeitos desta Lei, bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou anuidades escolares fixadas com base na Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999.

§ 4º Para os efeitos desta Lei, as bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) deverão ser concedidas, considerando-se todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles dados em virtude do pagamento pontual das mensalidades.

Art. 2º A bolsa será destinada:

I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral;

II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei;

III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, independentemente da renda a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 1o desta Lei.

Parágrafo único. A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo máximo para a conclusão do curso de graduação ou seqüencial de formação específica, dependerá do cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico, estabelecidos em normas expedidas pelo Ministério da Educação.

Art. 3º O estudante a ser beneficiado pelo Prouni será pré-selecionado pelos resultados e pelo perfil socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou outros critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação, e, na etapa final, selecionado pela instituição de ensino superior, segundo seus próprios critérios, à qual competirá, também, aferir as informações prestadas pelo candidato.

Parágrafo único. O beneficiário do Prouni responde legalmente pela veracidade e autenticidade das informações socioeconômicas por ele prestadas.

Art. 4º Todos os alunos da instituição, inclusive os beneficiários do Prouni, estarão igualmente regidos pelas mesmas normas e regulamentos internos da instituição.

Art. 5º A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente, poderá aderir ao Prouni mediante assinatura de termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa integral para o equivalente a 10,7 (dez inteiros e sete décimos) estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo anterior, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, excluído o número correspondente a bolsas integrais concedidas pelo Prouni ou pela própria instituição, em cursos efetivamente nela instalados.

§ 1º O termo de adesão terá prazo de vigência de 10 (dez) anos, contado da data de sua assinatura, renovável por iguais períodos e observado o disposto nesta Lei.

§ 2º O termo de adesão poderá prever a permuta de bolsas entre cursos e turnos, restrita a 1/5 (um quinto) das bolsas oferecidas para cada curso e cada turno.

§ 3º A denúncia do termo de adesão, por iniciativa da instituição privada, não implicará ônus para o Poder Público nem prejuízo para o estudante beneficiado pelo Prouni, que gozará do benefício concedido até a conclusão do curso, respeitadas as normas internas da instituição, inclusive disciplinares, e observado o disposto no art. 4o desta Lei.

§ 4º A instituição privada de ensino superior com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente poderá, alternativamente, em substituição ao requisito previsto no caput deste artigo, oferecer 1 (uma) bolsa integral para cada 22 (vinte



e dois) estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados em cursos efetivamente nela instalados, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, desde que ofereça, adicionalmente, quantidade de bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) na proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos na forma desta Lei atinja o equivalente a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) da receita anual dos períodos letivos que já têm bolsistas do Prouni, efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, em cursos de graduação ou seqüencial de formação específica.

§ 5º Para o ano de 2005, a instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente, poderá:

I - aderir ao Prouni mediante assinatura de termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa integral para cada 9 (nove) estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo anterior, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, excluído o número correspondente a bolsas integrais concedidas pelo Prouni ou pela própria instituição, em cursos efetivamente nela instalados;

II - alternativamente, em substituição ao requisito previsto no inciso I deste parágrafo, oferecer 1 (uma) bolsa integral para cada 19 (dezenove) estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados em cursos efetivamente nela instalados, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, desde que ofereça, adicionalmente, quantidade de bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) na proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos na forma desta Lei atinja o equivalente a 10% (dez por cento) da receita anual dos períodos letivos que já têm bolsistas do Prouni, efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, em cursos de graduação ou seqüencial de formação específica.

§ 6º Aplica-se o disposto no § 5º deste artigo às turmas iniciais de cada curso e turno efetivamente instaladas a partir do 1º (primeiro) processo seletivo posterior à publicação desta Lei, até atingir as proporções estabelecidas para o conjunto dos estudantes de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da instituição, e o disposto no caput e no § 4º deste artigo às turmas iniciais de cada curso e turno efetivamente instaladas a partir do exercício de 2006, até atingir as proporções estabelecidas para o conjunto dos estudantes de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da instituição.

Art. 6º Assim que atingida a proporção estabelecida no § 6º do art. 5º desta Lei, para o conjunto dos estudantes de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da instituição, sempre que a evasão dos estudantes beneficiados apresentar discrepância em relação à evasão dos demais estudantes matriculados, a instituição, a cada processo seletivo, oferecerá bolsas de estudo na proporção necessária para estabelecer aquela proporção.

Art. 7º As obrigações a serem cumpridas pela instituição de ensino superior serão previstas no termo de adesão ao Prouni, no qual deverão constar as seguintes cláusulas necessárias:

I - proporção de bolsas de estudo oferecidas por curso, turno e unidade, respeitados os parâmetros estabelecidos no art. 5o desta Lei;

II - percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e negros.

§ 1º O percentual de que trata o inciso II do caput deste artigo deverá ser, no mínimo, igual ao percentual de cidadãos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos, na respectiva unidade da Federação, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

§ 2º No caso de não-preenchimento das vagas segundo os critérios do § 1o deste artigo, as vagas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que se enquadrem em um dos critérios dos arts. 1o e 2o desta Lei.

§ 3º As instituições de ensino superior que não gozam de autonomia ficam autorizadas a ampliar, a partir da assinatura do termo de adesão, o número de vagas em seus cursos, no limite da proporção de bolsas integrais oferecidas por curso e turno, na forma do regulamento.

~~§ 4º O Ministério da Educação desvinculará do Prouni o curso considerado insuficiente, sem prejuízo do estudante já matriculado, segundo os critérios de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, por 3 (três) avaliações consecutivas, situação em que as bolsas de estudo do curso desvinculado, nos processos seletivos seguintes, deverão ser redistribuídas proporcionalmente pelos demais cursos da instituição, respeitado o disposto no art. 5o desta Lei.~~

§ 4º O Ministério da Educação desvinculará do Prouni o curso considerado insuficiente, sem prejuízo do estudante já matriculado, segundo critérios de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, por duas avaliações consecutivas, situação em que as bolsas de estudo do curso desvinculado, nos processos seletivos seguintes, deverão ser redistribuídas proporcionalmente pelos demais cursos da instituição, respeitado o disposto no art. 5o desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.509, de 2007)

§ 5º Será facultada, tendo prioridade os bolsistas do Prouni, a estudantes dos cursos referidos no § 4o deste artigo a transferência para curso idêntico ou equivalente, oferecido por outra instituição participante do Programa.

Art. 8º A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei nº 11.128, de 2005)



I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988;

III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; e

IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.

§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação específica.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 9º O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão sujeita a instituição às seguintes penalidades:

I - restabelecimento do número de bolsas a serem oferecidas gratuitamente, que será determinado, a cada processo seletivo, sempre que a instituição descumprir o percentual estabelecido no art. 5º desta Lei e que deverá ser suficiente para manter o percentual nele estabelecido, com acréscimo de 1/5 (um quinto);

II - desvinculação do Prouni, determinada em caso de reincidência, na hipótese de falta grave, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.

§ 1º As penas previstas no caput deste artigo serão aplicadas pelo Ministério da Educação, nos termos do disposto em regulamento, após a instauração de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e direito de defesa.

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, a suspensão da isenção dos impostos e contribuições de que trata o art. 8º desta Lei terá como termo inicial a data de ocorrência da falta que deu causa à desvinculação do Prouni, aplicando-se o disposto nos arts. 32 e 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no que couber.

§ 3º As penas previstas no caput deste artigo não poderão ser aplicadas quando o descumprimento das obrigações assumidas se der em face de razões a que a instituição não deu causa.

Art. 10. A instituição de ensino superior, ainda que atue no ensino básico ou em área distinta da educação, somente poderá ser considerada entidade beneficente

de assistência social se oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para estudante de curso de graduação ou seqüencial de formação específica, sem diploma de curso superior, enquadrado no § 1º do art. 1º desta Lei, para cada 9 (nove) estudantes pagantes de cursos de graduação ou seqüencial de formação específica regulares da instituição, matriculados em cursos efetivamente instalados, e atender às demais exigências legais.

§ 1º A instituição de que trata o caput deste artigo deverá aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeiras, de locação de bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações particulares, respeitadas, quando couber, as normas que disciplinam a atuação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde.

§ 2º Para o cumprimento do que dispõe o § 1º deste artigo, serão contabilizadas, além das bolsas integrais de que trata o caput deste artigo, as bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudante enquadrado no § 2º do art. 1º desta Lei e a assistência social em programas não decorrentes de obrigações curriculares de ensino e pesquisa.

§ 3º Aplica-se o disposto no caput deste artigo às turmas iniciais de cada curso e turno efetivamente instalados a partir do 1º (primeiro) processo seletivo posterior à publicação desta Lei.

§ 4º Assim que atingida a proporção estabelecida no caput deste artigo para o conjunto dos estudantes de cursos de graduação e seqüencial de formação específica da instituição, sempre que a evasão dos estudantes beneficiados apresentar discrepância em relação à evasão dos demais estudantes matriculados, a instituição, a cada processo seletivo, oferecerá bolsas de estudo integrais na proporção necessária para restabelecer aquela proporção.

§ 5º É permitida a permuta de bolsas entre cursos e turnos, restrita a 1/5 (um quinto) das bolsas oferecidas para cada curso e cada turno.

Art. 11. As entidades beneficentes de assistência social que atuem no ensino superior poderão, mediante assinatura de termo de adesão no Ministério da Educação, adotar as regras do Prouni, contidas nesta Lei, para seleção dos estudantes beneficiados com bolsas integrais e bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), em especial as regras previstas no art. 3º e no inciso II do caput e §§ 1º e 2º do art. 7º desta Lei, comprometendo-se, pelo prazo de vigência do termo de adesão, limitado a 10 (dez) anos, renovável por iguais períodos, e respeitado o disposto no art. 10 desta Lei, ao atendimento das seguintes condições:

I - oferecer 20% (vinte por cento), em gratuidade, de sua receita anual efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, ficando dispensadas do



cumprimento da exigência do § 1o do art. 10 desta Lei, desde que sejam respeitadas, quando couber, as normas que disciplinam a atuação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde;

II - para cumprimento do disposto no inciso I do caput deste artigo, a instituição:

a) deverá oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral a estudante de curso de graduação ou seqüencial de formação específica, sem diploma de curso superior, enquadrado no § 1o do art. 1o desta Lei, para cada 9 (nove) estudantes pagantes de curso de graduação ou seqüencial de formação específica regulares da instituição, matriculados em cursos efetivamente instalados, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 10 desta Lei;

b) poderá contabilizar os valores gastos em bolsas integrais e parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), destinadas a estudantes enquadrados no § 2o do art. 1o desta Lei, e o montante direcionado para a assistência social em programas não decorrentes de obrigações curriculares de ensino e pesquisa;

III - gozar do benefício previsto no § 3o do art. 7o desta Lei.

§ 1º Compete ao Ministério da Educação verificar e informar aos demais órgãos interessados a situação da entidade em relação ao cumprimento das exigências do Prouni, sem prejuízo das competências da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Previdência Social.

§ 2º As entidades beneficentes de assistência social que tiveram seus pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social indeferidos, nos 2 (dois) últimos triênios, unicamente por não atenderem ao percentual mínimo de gratuidade exigido, que adotarem as regras do Prouni, nos termos desta Lei, poderão, até 60 (sessenta) dias após a data de publicação desta Lei, requerer ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS a concessão de novo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e, posteriormente, requerer ao Ministério da Previdência Social a isenção das contribuições de que trata o art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 3º O Ministério da Previdência Social decidirá sobre o pedido de isenção da entidade que obtiver o Certificado na forma do caput deste artigo com efeitos a partir da edição da Medida Provisória no 213, de 10 de setembro de 2004, cabendo à entidade comprovar ao Ministério da Previdência Social o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, até o último dia do mês de abril subsequente a cada um dos 3 (três) próximos exercícios fiscais.

§ 4º Na hipótese de o CNAS não decidir sobre o pedido até o dia 31 de março de 2005, a entidade poderá formular ao Ministério da Previdência Social o pedido de isenção, independentemente do pronunciamento do CNAS, mediante apresen-

tação de cópia do requerimento encaminhando a este e do respectivo protocolo de recebimento.

§ 5º Aplica-se, no que couber, ao pedido de isenção de que trata este artigo o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 12. Atendidas as condições socioeconômicas estabelecidas nos §§ 1o e 2o do art. 1o desta Lei, as instituições que aderirem ao Prouni ou adotarem suas regras de seleção poderão considerar como bolsistas do programa os trabalhadores da própria instituição e dependentes destes que forem bolsistas em decorrência de convenção coletiva ou acordo trabalhista, até o limite de 10% (dez por cento) das bolsas Prouni concedidas.

Art. 13. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, sem fins lucrativos, que adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 desta Lei e que estejam no gozo da isenção da contribuição para a seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal, que optarem, a partir da data de publicação desta Lei, por transformar sua natureza jurídica em sociedade de fins econômicos, na forma facultada pelo art. 7o-A da Lei no 9.131, de 24 de novembro de 1995, passarão a pagar a quota patronal para a previdência social de forma gradual, durante o prazo de 5 (cinco) anos, na razão de 20% (vinte por cento) do valor devido a cada ano, cumulativamente, até atingir o valor integral das contribuições devidas.

Parágrafo único. A pessoa jurídica de direito privado transformada em sociedade de fins econômicos passará a pagar a contribuição previdenciária de que trata o caput deste artigo a partir do 1o dia do mês de realização da assembléia geral que autorizar a transformação da sua natureza jurídica, respeitada a gradação correspondente ao respectivo ano.

Art. 14. Terão prioridade na distribuição dos recursos disponíveis no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES as instituições de direito privado que aderirem ao Prouni na forma do art. 5o desta Lei ou adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 desta Lei.

Art. 15. Para os fins desta Lei, o disposto no art. 6o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, será exigido a partir do ano de 2006 de todas as instituições de ensino superior aderentes ao Prouni, inclusive na vigência da Medida Provisória no 213, de 10 de setembro de 2004.

Art. 16. O processo de deferimento do termo de adesão pelo Ministério da Educação, nos termos do art. 5o desta Lei, será instruído com a estimativa da renúncia fiscal, no exercício de deferimento e nos 2 (dois) subseqüentes, a ser usufruída pela respectiva instituição, na forma do art. 9o desta Lei, bem como o demonstrativo da compensação da referida renúncia, do crescimento da arrecadação de impostos e contribuições federais no mesmo segmento econômico ou da prévia redução de despesas de caráter continuado.



Parágrafo único. A evolução da arrecadação e da renúncia fiscal das instituições privadas de ensino superior será acompanhada por grupo interministerial, composto por 1 (um) representante do Ministério da Educação, 1 (um) do Ministério da Fazenda e 1 (um) do Ministério da Previdência Social, que fornecerá os subsídios necessários à execução do disposto no caput deste artigo.

Art. 17. (VETADO).

Art. 18. O Poder Executivo dará, anualmente, ampla publicidade dos resultados do Programa.

Art. 19. Os termos de adesão firmados durante a vigência da Medida Provisória no 213, de 10 de setembro de 2004, ficam validados pelo prazo neles especificado, observado o disposto no § 4o e no caput do art. 5o desta Lei.

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.

Art. 21. Os incisos I, II e VII do caput do art. 3o da Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º

I - possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta Nacional, Atleta Internacional Olímpico e Paraolímpico, e possuir idade mínima de 12 (doze) anos para a obtenção da Bolsa-Atleta Estudantil;

II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva, exceto os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil;

.....

VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, exclusivamente para os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil.” (NR)

Art. 22. O Anexo I da Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, passa a vigorar com a alteração constante do Anexo I desta Lei.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de janeiro de 2005; 184o da Independência e 117o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho Tarso Genro

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.1.2005

ANEXO I

Bolsa-Atleta – Categoria Atleta Estudantil

Atletas Eventualmente Beneficiados	Valor Mensal
Atletas a partir de 12 (doze) anos, participantes dos jogos estudantis organizados pelo Ministério do Esporte, tendo obtido até a 3ª (terceira) colocação nas modalidades individuais ou que tenham sido selecionados entre os 24 (vinte e quatro) melhores atletas das modalidades coletivas dos referidos eventos e que continuem a treinar para futuras competições nacionais. (NR)	R\$ 300,00 (trezentos reais)



**Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos**

DECRETO Nº 6.872, DE 4 DE JUNHO DE 2009.

Aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PLANAPIR, e institui o seu Comitê de Articulação e Monitoramento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PLANAPIR, em consonância com os objetivos indicados no Anexo deste Decreto.

Art. 2º A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República aprovará e publicará a programação das ações, metas e prioridades do PLANAPIR propostas pelo Comitê de Articulação e Monitoramento de que trata o art. 3º, observados os objetivos contidos no Anexo.

Parágrafo único. Os prazos para execução das ações, metas e prioridades do PLANAPIR poderão ser revisados pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, mediante proposta do Comitê de Articulação.

Art. 3º Fica instituído o Comitê de Articulação e Monitoramento do PLANAPIR, no âmbito da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, integrado por:

I - um representante de cada órgão a seguir indicado:

- a) Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que o coordenará;
- b) Secretaria-Geral da Presidência da República;
- c) Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República;
- d) Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República;
- e) Ministério da Educação;
- f) Ministério da Justiça;

- g) Ministério da Saúde;
- h) Ministério das Cidades;
- i) Ministério do Desenvolvimento Agrário;
- j) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
- k) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
- l) Ministério do Trabalho e Emprego;
- m) Ministério das Relações Exteriores;
- n) Ministério da Cultura; e
- o) Ministério de Minas e Energia; e

II - três representantes do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR.

Parágrafo único. Os membros do Comitê de Articulação e Monitoramento do PLANAPIR e respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos nele representados e designados pelo Ministro de Estado Chefe da Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 4º Compete ao Comitê de Articulação e Monitoramento do PLANAPIR:

- I - propor ações, metas e prioridades;
- II - estabelecer a metodologia de monitoramento;
- III - acompanhar e avaliar as atividades de implementação;
- IV - promover difusão do PLANAPIR junto a órgãos e entidades governamentais e não-governamentais;
- V - propor ajustes de metas, prioridades e ações;
- VI - elaborar relatório anual de acompanhamento das ações do PLANAPIR; e
- VII - propor revisão do PLANAPIR, semestralmente, considerando as diretrizes emanadas das Conferências Nacionais de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 5º O Comitê de Articulação e Monitoramento do PLANAPIR deliberará mediante resoluções, por maioria simples, cabendo ao seu coordenador o voto de qualidade.



Art. 6º O Comitê de Articulação e Monitoramento do PLANAPIR poderá instituir comissões técnicas com a função de colaborar para o cumprimento das suas atribuições, sistematizar as informações recebidas e subsidiar a elaboração dos relatórios anuais.

Art. 7º O regimento interno do Comitê de Articulação e Monitoramento do PLANAPIR será aprovado por maioria absoluta dos seus membros e disporá sobre a organização, forma de apreciação e deliberação das matérias, bem como sobre a composição e o funcionamento das comissões técnicas.

Art. 8º Caberá à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial prover o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê de Articulação e Monitoramento do PLANAPIR e das comissões técnicas.

Art. 9º As atividades dos membros do Comitê de Articulação e Monitoramento do PLANAPIR e das comissões técnicas são consideradas serviço público relevante não remunerado.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de junho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.6.2009

ANEXO

OBJETIVOS DO PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - PLANAPIR

Eixo 1: Trabalho e Desenvolvimento Econômico

I - promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e de remuneração das populações negra, indígena, quilombola e cigana no mercado de trabalho, com destaque para a juventude e as trabalhadoras domésticas;

II - promover a equidade de gênero, raça e etnia nas relações de trabalho e combater as discriminações ao acesso e na relação de emprego, trabalho ou ocupação;

III - combater o racismo nas instituições públicas e privadas, fortalecendo os mecanismos de fiscalização quanto à prática de discriminação racial no mercado de trabalho;

IV - promover a capacitação e a assistência técnica diferenciadas das comunidades negras, indígenas e ciganas;

V - ampliar as parcerias dos núcleos de combate à discriminação e promoção da igualdade de oportunidades, das superintendências regionais do trabalho, com entidades e associações do movimento negro e com organizações governamentais;

VI - capacitar gestores públicos para a incorporação da dimensão etnicorracial nas políticas públicas de trabalho e emprego;

VII - ampliar o apoio a projetos de economia popular e solidária nos grupos produtivos organizados de negros, com recorte de gênero e idade; e

VIII - propor sistema de incentivo fiscal para empresas que promovam a igualdade racial.

Eixo 2: Educação

I - estimular o acesso, a permanência e a melhoria do desempenho de crianças, adolescentes, jovens e adultos das populações negras, quilombolas, indígenas, ciganas e demais grupos discriminados, em todos os níveis, da educação infantil ao ensino superior, considerando as modalidades de educação de jovens e adultos e a tecnológica;

II - promover a formação de professores e profissionais da educação nas áreas temáticas definidas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações etnicorraciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena;

III - promover políticas públicas para reduzir a evasão escolar e a defasagem idade-série dos alunos pertencentes aos grupos etnicorraciais discriminados;

IV - promover formas de combate ao analfabetismo entre as populações negra, indígena, cigana e demais grupos etnicorraciais discriminados;

V - elaborar projeto de lei com o objetivo de garantir às comunidades ciganas a equivalente prerrogativa de direito contida no art. 29 da Lei no 6.533, de 24 de maio de 1978, que garante a matrícula nas escolas públicas para profissionais que exercem atividade itinerante;

VI - promover a implementação da Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e do disposto no art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, do Parecer CNE/CP 3/2004 e da Resolução CNE 01/2004, garantindo seu amplo conhecimento pela população brasileira;



VII - promover e estimular a inclusão do quesito raça ou cor em todos os formulários de coleta de dados de alunos em todos os níveis dos sistemas de ensino, público e privado;

VIII - estimular maior articulação entre a instituição universitária e as comunidades tradicionais, proporcionando troca de saberes, de práticas e de experiências;

IX - estimular a adoção do sistema de reserva de vagas para negros e indígenas no ingresso às universidades públicas;

X - apoiar a implantação de escolas públicas, de nível fundamental e médio, nas comunidades quilombolas e indígenas, com garantia do transporte escolar gratuito e demais benefícios previstos no plano de desenvolvimento da educação;

XI - apoiar as instituições públicas de educação superior no desenvolvimento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para a implementação e para o impacto de políticas de ação afirmativa para as populações negra, indígena e demais grupos étnicos sub-representados no ensino de terceiro grau; e

XII - fortalecer os conselhos sociais das instituições de ensino superior, com representantes de todos os segmentos envolvidos, para monitorar o Programa Universidade para Todos – ProUni, principalmente no que se relaciona à inclusão de jovens negros e indígenas.

Eixo 3: Saúde

I - ampliar a implementação da política nacional de saúde integral da população negra;

II - promover a integralidade, com equidade, na atenção à saúde das populações negras, indígenas, ciganas e quilombolas;

III - fortalecer a dimensão etnicorracial no Sistema Único de Saúde, incorporando-a à elaboração, implementação, controle social e avaliação dos programas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde;

IV - aferir e combater o impacto bio-psicossocial do racismo e da discriminação na constituição do perfil de morbimortalidade da população negra;

V - promover ações que assegurem o aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade da população negra e indígena;

VI - ampliar o acesso das populações negra, indígena, cigana e quilombola, com qualidade e humanização, a todos os níveis de atenção à saúde, priorizando a questão de gênero e idade;

VII – preservar o uso de bens materiais e imateriais do patrimônio cultural das comunidades quilombolas, indígenas, ciganas e de terreiro;

VIII - desenvolver medidas de promoção de saúde e implementar o programa saúde da família, nas aldeias indígenas, acampamentos ciganos e comunidades quilombolas;

IX - assegurar a implementação do programa nacional de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias;

X - desenvolver ações específicas de combate à disseminação de HIV/AIDS e demais DST junto às populações negras, indígenas e ciganas;

XI - disseminar informações e conhecimento junto às populações negras, indígenas e demais grupos etnicorraciais discriminados, sobre suas potencialidades e susceptibilidades em termos de saúde, e os conseqüentes riscos de morbimortalidade; e

XII - ampliar as ações de planejamento familiar, às comunidades de terreiros, quilombolas e ciganas

.

Eixo 4: Diversidade Cultural

I - promover o respeito à diversidade cultural dos grupos formadores da sociedade brasileira e demais grupos etnicorraciais discriminados na luta contra o racismo, a xenofobia e as intolerâncias correlatas;

II - estimular a eliminação da veiculação de estereótipos de gênero, raça, cor e etnia nos meios de comunicação;

III - fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos etnicorraciais brasileiros e ampliar sua visibilidade na mídia;

IV - consolidar instrumentos de preservação do patrimônio cultural material e imaterial dos diversos grupos étnicos brasileiros;

V - garantir as manifestações públicas de valorização da pluralidade religiosa no Brasil, conforme dispõe a Constituição;

VI - estimular a inclusão dos marcos históricos significativos das diversas etnias e grupos discriminados, no calendário festivo oficial brasileiro;

VII - apoiar a instituição do feriado nacional no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra;

VIII - estimular a inclusão de critérios de concessões de rádio e televisão que garan-



tam políticas afirmativas para negros, indígenas, ciganos e demais representantes de minorias etnicorraciais brasileiras; e

IX - estimular a inclusão de cotas de representantes das populações negras, indígenas, ciganas e demais minorias étnicas, nas mídias, especialmente a televisiva e em peças publicitárias.

Eixo 5: Direitos Humanos e Segurança Pública

I - apoiar a instituição do Estatuto de Igualdade Racial;

II - estimular ações de segurança pública voltadas para a proteção de jovens negros, indígenas, quilombolas e ciganos, contra a violência;

III - estimular os órgãos de segurança pública estadual a atuarem com eficácia na proteção das comunidades de terreiros, indígenas, ciganas e quilombolas;

IV - combater todas as formas de abuso aos direitos humanos das mulheres negras, indígenas, quilombolas e ciganas;

V - estimular a implementação da política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas;

VI - combater a exploração do trabalho infantil, especialmente o doméstico, entre as crianças negras e indígenas;

VII - ampliar e fortalecer políticas públicas para reinserção social e econômica de adolescentes e jovens egressos, respectivamente, da internação em instituições sócio-educativas ou do sistema prisional;

VIII - combater os estigmas contra negros, índios e ciganos; e

IX - estimular ações de segurança que atendam à especificidade de negros, ciganos, indígenas, comunidades de terreiros e quilombolas.

Eixo 6: Comunidades Remanescentes de Quilombos

I - promover o desenvolvimento econômico sustentável das comunidades remanescentes de quilombos, inserido-as no potencial produtivo nacional;

II - promover o efetivo controle social das políticas públicas voltadas às comunidades remanescentes de quilombos;

III - promover a titulação das terras das comunidades remanescentes de quilombos, em todo o País;

IV - promover a proteção das terras das comunidades remanescentes de quilombos;

V - promover a preservação do patrimônio ambiental e do patrimônio cultural, material e imaterial, das comunidades remanescentes de quilombos;

VI - promover a identificação e levantamento socioeconômico de todas as comunidades remanescentes de quilombos do Brasil;

VII - ampliar os sistemas de assistência técnica para fomentar e potencializar as atividades produtivas das comunidades remanescentes de quilombos, visando o apoio à produção diversificada, seu beneficiamento e comercialização;

VIII - estimular estudos e pesquisas voltados às manifestações culturais de comunidades remanescentes de quilombos;

IX - estimular a troca de experiências culturais entre comunidades remanescentes de quilombos do Brasil e os países africanos; e

X - incentivar ações de gestão sustentável das terras remanescentes de quilombos e a consolidação de banco de dados das comunidades tradicionais.

Eixo 7: Povos Indígenas

I - garantir a preservação do patrimônio ambiental e do patrimônio cultural material e imaterial dos povos indígenas;

II - implementar ações para o etnodesenvolvimento dos povos indígenas, com especial atenção à mulher indígena;

III - promover a regularização das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios;

IV - apoiar a reformulação do Estatuto do Índio;

V - apoiar a criminalização dos atos racistas e discriminatórios em relação a indígenas e descendentes;

VI - desenvolver programas e projetos de apoio à produção e comercialização agrícola, pecuária, extrativista e artesanal de comunidades indígenas;

VII - diminuir a taxa de mortalidade materna indígena; e

VIII - promover a inclusão das comunidades indígenas nas ações de apoio à produção e comercialização da agricultura familiar.



Eixo 8: Comunidades Tradicionais de Terreiro

- I - assegurar o caráter laico do Estado brasileiro;
- II - garantir o cumprimento do preceito constitucional de liberdade de credo;
- III - combater a intolerância religiosa;
- IV - promover o respeito aos religiosos e aos adeptos de religiões de matriz africana no País, e garantir aos seus sacerdotes, cultos e templos os mesmos direitos garantidos às outras religiões professadas no País;
- V - promover mapeamento da situação fundiária das comunidades tradicionais de terreiro;
- VI - promover melhorias de infraestrutura nas comunidades tradicionais de terreiro; e
- VII - estimular a preservação de templos certificados como patrimônio cultural.

Eixo 9: Política Internacional

- I - aprimorar a articulação entre a política externa brasileira e as políticas nacionais de promoção da igualdade racial;
- II - prosseguir com o fortalecimento da relação com organismos internacionais de proteção aos direitos humanos;
- III - fomentar o intercâmbio e a cooperação internacional de experiências em matéria de proteção e promoção dos direitos humanos;
- IV - prosseguir na intensificação dos laços políticos, econômicos, comerciais e culturais com o Continente Africano e a América Latina;
- V - participar de foros permanentes sobre questões indígenas e apoiar as posições de consenso entre os povos indígenas brasileiros; e
- VI - trabalhar para a adesão do Brasil aos seguintes instrumentos internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos:
 - a) Convenção 138 e Recomendação 146 da OIT, que tratam da idade mínima para admissão no emprego;
 - b) Convenção Internacional para Proteção dos Direitos dos Migrantes e de suas Famílias, aprovada pela ONU em 1990; e

c) Convenção Interamericana sobre Desaparecimentos Forçados de Pessoas, assinada em Belém-PA em 9 de junho de 1994;

VII - participar, organizar, acompanhar e sediar conferências e eventos de ações afirmativas de combate ao racismo e intolerâncias correlatas.

Eixo 10: Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar

I - fortalecer as ações de combate à pobreza e à fome no Brasil, incorporando a perspectiva etnicorracial e de gênero em todas as ações de assistência social, de segurança alimentar e nutricional, e nos programas de transferência condicionada de renda do Governo Federal, com prioridade às mulheres chefes de família;

II - promover a igualdade de direitos no acesso ao atendimento sócio-assistencial, à segurança alimentar e nutricional e aos programas de transferência condicionada de renda, sem discriminação etnicorracial, cultural, de gênero, ou de qualquer outra natureza;

III - incorporar as necessidades das comunidades indígenas, ciganas e negras nas diretrizes do planejamento das políticas de assistência social e de segurança alimentar e nutricional;

IV - promover a articulação das políticas de assistência social, de renda de cidadania, de segurança alimentar e nutricional e de inclusão produtiva, voltadas a todos os segmentos etnicorraciais, nas diversas esferas de governo, com o setor privado e junto às entidades da sociedade civil;

V - desenvolver mecanismos de controle social de políticas, programas e ações de desenvolvimento social e combate à fome, garantindo a representação de todos os grupos étnico-raciais nas instâncias de controle social;

VI - garantir políticas de renda, cidadania, assistência social e segurança alimentar e nutricional para a população negra, quilombola, indígena, cigana, e de comunidades de terreiros;

VII - registrar identidade etnicorracial dos beneficiários nos diversos instrumentos de cadastro dos programas de assistência social, de segurança alimentar e de renda de cidadania;

VIII - fortalecer as interações do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, organizado pelo Decreto no 6.272, de 23 de novembro de 2007, e com as entidades representativas de remanescentes de quilombos, povos indígenas, ciganos e comunidades de terreiros; e

IX - criar, fortalecer e ampliar programas e projetos de desenvolvimento social e segurança alimentar e nutricional, com ênfase nos saberes e práticas indígenas, ciganas, quilombolas, de contextos sócio-religiosos de matriz africana.



Eixo 11: Infraestrutura

- I - assegurar o acesso da população negra, indígena, quilombola e cigana, urbanas ou rurais, aos programas de política habitacional;
- II - estabelecer política de promoção da igualdade racial nos programas de financiamento de habitação, de interesse social, sob gestão do Governo Federal;
- III - fornecer orientação técnica aos Municípios para que incluam no seu planejamento territorial áreas urbanas e rurais, os territórios quilombolas e as áreas de terreiro destinadas ao culto da religião de matriz africana;
- IV - promover eletrificação nas áreas habitadas pelas comunidades negras, quilombolas e indígenas do meio rural; e
- V - promover o saneamento básico nas áreas habitadas pelas comunidades negras e quilombolas.

Eixo 12: Juventude

- I - ampliar as ações de qualificação profissional e desenvolvimento humano voltadas aos jovens negros, especialmente nas áreas de grande aglomeração urbana;
- II - promover ações de combate à violência contra a população negra, indígena e cigana jovens;
- III - promover políticas públicas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação que tenham como público alvo a juventude negra, indígena e cigano;
- IV - assegurar a participação da juventude negra, indígena e cigana nos espaços institucionais e de participação social;
- V - reduzir os índices de mortalidade de jovens negros, indígenas e ciganos;
- VI - promover ações de reforço à cidadania e identidade do jovem, com ênfase na população negra; e
- VII - apoiar ações afirmativas que objetivem ampliar o acesso e permanência do jovem negro, indígena e cigano na escola, notadamente na universidade.

**Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos**

LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010.

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:

I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada;

II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica;

III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais;

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;

V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais;



VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.

Art. 2º É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais.

Art. 3º Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira.

Art. 4º A participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de:

I - inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social;

II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa;

III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica;

IV - promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais;

V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada;

VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos;

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros.

Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais prá-

ticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do País.

Art. 5o Para a consecução dos objetivos desta Lei, é instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), conforme estabelecido no Título III.

TÍTULO II

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DO DIREITO À SAÚDE

Art. 6º O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos.

§ 1º O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta.

§ 2º O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação.

Art. 7o O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas:

I - ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS;

II - produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra;

III - desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra.

Art. 8º Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra:

I - a promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS;



II - a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero;

III - o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra;

IV - a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde;

V - a inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS.

Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde.

CAPÍTULO II

DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER

Seção I

Disposições Gerais

Art. 9º A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira.

Art. 10. Para o cumprimento do disposto no art. 9º, os governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão as seguintes providências:

I - promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer;

II - apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção social e cultural da população negra;

III - desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade;

IV - implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira.

Seção II

Da Educação

Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observado o disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País.

§ 2º O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração.

Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra.

Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a:

I - resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra;

II - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira;

III - desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários;

IV - estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas.



Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos.

Art. 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa.

Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta Seção.

Seção III

Da Cultura

Art. 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.

Art. 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado.

Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do § 5o do art. 216 da Constituição Federal, receberá especial atenção do poder público.

Art. 19. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas.

Art. 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira, em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, nos termos do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais.

Seção IV

Do Esporte e Lazer

Art. 21. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais.

Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do art. 217 da Constituição Federal.

§ 1º A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional.

§ 2º É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

CAPÍTULO III

DO DIREITO À LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA E AO LIVRE EXERCÍCIO DOS CULTOS RELIGIOSOS

Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende:

I - a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados para tais fins;

II - a celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões;

III - a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas;

IV - a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica;

V - a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana;

VI - a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões;



VII - o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para divulgação das respectivas religiões;

VIII - a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.

Art. 25. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.

Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de:

I - coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas;

II - inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas;

III - assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público.

CAPÍTULO IV

DO ACESSO À TERRA E À MORADIA ADEQUADA

Seção I

Do Acesso à Terra

Art. 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo.

Art. 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola.

Art. 29. Serão assegurados à população negra a assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística para a comercialização da produção.

Art. 30. O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais.

Art. 31. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades.

Art. 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público, destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura.

Art. 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica.

Seção II

Da Moradia

Art. 35. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida.

Parágrafo único. O direito à moradia adequada, para os efeitos desta Lei, inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associados à função habitacional, bem como a assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana.

Art. 36. Os programas, projetos e outras ações governamentais realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), regulado pela Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estimularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos da população negra na composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).



Art. 37. Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais.

CAPÍTULO V

DO TRABALHO

Art. 38. A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando-se:

I - o instituído neste Estatuto;

II - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965;

III - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção no 111, de 1958, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da discriminação no emprego e na profissão;

IV - os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional.

Art. 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando à promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas.

§ 1º A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra.

§ 2º As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos.

§ 3º O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado.

§ 4º As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários.

§ 5º Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras.

§ 6º O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural.

§ 7º O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contem com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização.

Art. 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação de recursos para seu financiamento.

Art. 41. As ações de emprego e renda, promovidas por meio de financiamento para constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda, contemplarão o estímulo à promoção de empresários negros.

Parágrafo único. O poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra.

Art. 42. O Poder Executivo federal poderá implementar critérios para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observados os dados demográficos oficiais.

CAPÍTULO VI

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do País.

Art. 44. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística.

Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados.

Art. 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto no art. 44.

Art. 46. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais



deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário.

§ 1º Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão, nas especificações para contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado.

§ 2º Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado.

§ 3º A autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do poder público federal.

§ 4º A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados.

TÍTULO III

DO SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

(SINAPIR)

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 47. É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no País, prestados pelo poder público federal.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão participar do Sinapir mediante adesão.

§ 2º O poder público federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do Sinapir.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 48. São objetivos do Sinapir:

I - promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas;

II - formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra;

III - descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais;

IV - articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica;

V - garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 49. O Poder Executivo federal elaborará plano nacional de promoção da igualdade racial contendo as metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR).

§ 1º A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanhamento da PNPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do Sinapir, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional.

§ 2º É o Poder Executivo federal autorizado a instituir fórum intergovernamental de promoção da igualdade étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igualdade étnica, com o objetivo de implementar estratégias que visem à incorporação da política nacional de promoção da igualdade étnica nas ações governamentais de Estados e Municípios.

§ 3º As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil.

Art. 50. Os Poderes Executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da



igualdade étnica, de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da população negra.

Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o repasse dos recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta Lei aos Estados, Distrito Federal e Municípios que tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica.

CAPÍTULO IV

DAS OUVIDORIAS PERMANENTES E DO ACESSO À JUSTIÇA E À SEGURANÇA

Art. 51. O poder público federal instituirá, na forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Igualdade Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade.

Art. 52. É assegurado às vítimas de discriminação étnica o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.

Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às mulheres negras em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica.

Art. 53. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra.

Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei e exposta a experiências de exclusão social.

Art. 54. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado, no que couber, o disposto na Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989.

Art. 55. Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública, disciplinada na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO V

DO FINANCIAMENTO DAS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Art. 56. Na implementação dos programas e das ações constantes dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais da União, deverão ser observadas as políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso VII do art. 4º desta Lei e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no que tange a:

I - promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego e moradia;

II - financiamento de pesquisas, nas áreas de educação, saúde e emprego, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra;

III - incentivo à criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da população negra;

IV - incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras;

V - iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior;

VI - apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e municipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra;

VII - apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras.

§ 1º O Poder Executivo federal é autorizado a adotar medidas que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer.

§ 2º Durante os 5 (cinco) primeiros anos, a contar do exercício subsequente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo federal que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no § 1º deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos programas de ação afirmativa referidos no inciso VII do art. 4º desta Lei.



§ 3º O Poder Executivo é autorizado a adotar as medidas necessárias para a adequada implementação do disposto neste artigo, podendo estabelecer patamares de participação crescente dos programas de ação afirmativa nos orçamentos anuais a que se refere o § 2º deste artigo.

§ 4º O órgão colegiado do Poder Executivo federal responsável pela promoção da igualdade racial acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo nas propostas orçamentárias da União.

Art. 57. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos fiscal e da seguridade social para financiamento das ações de que trata o art. 56:

I - transferências voluntárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - doações voluntárias de particulares;

III - doações de empresas privadas e organizações não governamentais, nacionais ou internacionais;

IV - doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais;

V - doações de Estados estrangeiros, por meio de convênios, tratados e acordos internacionais.

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 58. As medidas instituídas nesta Lei não excluem outras em prol da população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 59. O Poder Executivo federal criará instrumentos para aferir a eficácia social das medidas previstas nesta Lei e efetuará seu monitoramento constante, com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela rede mundial de computadores.

Art. 60. Os arts. 3º e 4º da Lei no 7.716, de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional.”
(NR)

“Art. 4o

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica:

I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores;

II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional;

III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário.

§ 2º Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.” (NR)

Art. 61. Os arts. 3o e 4o da Lei no 9.029, de 13 de abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no art. 2o e nos dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça ou cor, as infrações do disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações:

.....” (NR)

“Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre:

.....” (NR)

Art. 62. O art. 13 da Lei no 7.347, de 1985, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1o:

“Art. 13.

§ 1º

§ 2º Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacio-



nal de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente.” (NR)

Art. 63. O § 1o do art. 1o da Lei no 10.778, de 24 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º

§ 1o Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado.

.....” (NR)

Art. 64. O § 3o do art. 20 da Lei no 7.716, de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 2º.

.....

§ 3º

.....

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.

.....” (NR)

Art. 65. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

Brasília, 20 de julho de 2010; 189o da Independência e 122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Eloi Ferreira de Araújo

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.7.2010





III. Anexos

Programa del Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas

**Departamento de Derecho Internacional
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Organización de los Estados Americanos**

**Washington, DC, 22 de febrero de 2011
Sede de la Secretaría General de la OEA**

Sesión de la mañana

9:30 – 10:00 **Registro**

10:00 – 10:30 **Apertura**

Palabras de **Dante Negro**, Director del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA

Presentación de la Metodología del Taller por parte de **Diego Moreno** Oficial Jurídico del Departamento de Derecho Internacional de la OEA

10:30 – 11:00 **Primer panel: Ecuador**

Catherine Chalá, Coordinadora del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana del Ecuador

11:00 – 11:30 Preguntas y respuestas

11:30 – 11:45 Coffee Break

11:45 – 12:15 **Segundo panel: Panamá**

Ricardo Weeks, Secretario del Consejo Nacional de la Etnia Negra de Panamá

12: 15 – 12:45 Preguntas y respuestas

Sesión de la tarde

1:30 – 2:00 **Tercer Panel: Estados Unidos**

Zakiya Carr Johnson, Asesora Principal de la Unidad de Raza, Etnicidad e Inclusión Social del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América

2:00 – 2:30 Preguntas y respuestas

2:30 – 3:00 **Cuarto Panel: Brasil**

Renato Dos Santos Ferreira, Asesor Jurídico y Gerente de Proyectos de la Secretaría de Políticas de Promoción de Igualdad Racial – SEPPIR

3:00 – 3:30 Preguntas y respuestas

3:30 – 3:45 Coffee Break

3:45 – 4:00 Conclusiones a cargo de **Roberto Rojas Dávila**, Consultor del Departamento de Derecho Internacional de la OEA

4:00 – 4:15 **Cierre del II Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas**

Palabras de **Jean-Michel Arrighi**, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA





III. Anexos

Hoja de Vida de las/os Expositoras/es

Catherine Chalá Angulo

Coordinadora del Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión étnica y cultural del Ecuador y Funcionaria de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana del Ecuador. Consultora y conferencista en temas de género y afroecuatorianos.

Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Central del Ecuador. Candidata a Magíster en Ciencias Sociales con mención en Estudios de Género en la Facultad de Ciencias Sociales FLACSO/ Ecuador. Con estudios en Gerencia Social en el Instituto de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo y en Intervención, Asesoría y Terapia Sistémica en la Universidad Politécnica Salesiana. Fue Directora Nacional de Formación Ciudadana, Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

Ricardo Weeks

Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Etnia Negra, Comisionado de la Comisión Nacional contra la Discriminación en Panamá; Comisionado de la Comisión para el Estudio, Revisión y Aprobación del Plan de Acción de la Etnia Negra de Panamá y Asistente del Señor Presidente de la República de Panamá.

Cantautor, productor y director musical, es conocido por su labor social y por sus letras de crítica social. Licenciado en Ingeniería Mecánica. Fue Comisionado de la Comisión Derechos Humanos de Panamá (E.P.U.) para el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos.

Renato Ferreira

Gerente de Projetos e Assessor Jurídico da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Professor de Direito da Faculdade Cândido Mendes e conferencista na área de Direitos Humanos e Relações Étnico-raciais.

Formado em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2001). Pós Graduado em Direito Empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas na Fundação Getúlio Vargas - FGV/EBAPE (2003). Mestre em Políticas Públicas e Formação Humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2009). Pesquisador do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ (2005-2009). Membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil/RJ (2008-2010). Pesquisador do Fórum Latino Americano de Políticas Educativas - FLAPE (2007-2009). Participante do Fórum para Direitos Humanos e Minorias na ONU em Genebra (2008/2009). Membro do International Visitor Leadership Program (IVLP), curso fornecido pelo Departamento de Estado EUA (2008). Advogado de Movimentos Sociais com ênfase em Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais (2002-2010).

Zakiya S. Carr Johnson

Senior Advisor of Race, Ethnicity, and Social Inclusion Unit Bureau of Western Hemisphere Affairs of U.S. Department of State.

Zakiya Carr Johnson served as the Representative for Venezuela and Ecuador at the Inter-American Foundation (IAF) where she funded grassroots development projects to improve the quality of life for women, youth, indigenous and African descendant communities in rural and urban areas. Prior to her service at the IAF, she coordinated the Inter-American Development Bank's Social Inclusion Trust Fund which provided seed money and support for projects focused on indigenous peoples, people of African descent, people with HIV/AIDS, people with disabilities and poor women. Before that Ms. Carr Johnson headed the Latin America Program at Global Rights (formerly known as International Human Rights Law Group) and developed their program focus on economic, social and cultural rights and racial equality in Brazil and the southern cone, Colombia and Nicaragua. For over 15 years, Ms. Carr Johnson has served traditionally marginalized communities throughout Latin America through international advocacy and development initiatives. She has worked in international organizations and with the NGO community to promote race and gender equality in Uruguay, Peru, Colombia, Nicaragua and spent three years in Sao Paulo, Brazil working with Geledes Instituto da Mulher Negra. Ms. Johnson has written articles and coordinated international dialogues on social inclusion, equity, rights-based development and diversity.





III. Anexos

Proyecto para la Incorporación de la Temática Afrodescendiente en las Políticas y Programas de la OEA

Existen aproximadamente 200 millones de afrodescendientes en las Américas. A pesar de ser más de un tercio de la población de la región, se encuentran entre los grupos más vulnerables del Hemisferio. Diversos órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como el Proceso de Cumbres de las Américas, han expresado de manera reiterada su preocupación con relación a la inclusión, el respeto a los derechos humanos, y la atención de las necesidades de este colectivo.

Como una manera de dar respuesta a esta preocupación, el Departamento de Derecho Internacional de la OEA ha impulsado este proyecto con el fin de incrementar la gobernabilidad democrática del Hemisferio por medio de la inclusión de las y los afrodescendientes, con una mayor sensibilidad hacia sus derechos y necesidades básicas. Todo ello de conformidad a los estándares internacionales de protección que asisten a este colectivo.

Entre los objetivos del proyecto, destacan los siguientes:

- Promover los derechos de los y las afrodescendientes en la región, así como otros estándares de protección internacional
- Fomentar la inclusión de este colectivo en los órganos políticos del Sistema Interamericano, en especial, en el ámbito de la OEA
- Impulsar el empoderamiento a nivel hemisférico de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática afrodescendiente

A fin de alcanzar sus objetivos, el proyecto contempla diversas actividades, entre las cuales podemos mencionar:

- Promoción de la temática afrodescendiente en la OEA y otros foros del Sistema Interamericano, así como en cursos y jornadas sobre derecho Internacional
- Realización de talleres de capacitación y empoderamiento en temas vinculados a la protección internacional de las y los afrodescendientes

- Apoyo financiero y de capacitación a organizaciones de la sociedad civil para facilitar su participación en la OEA y otros foros del Sistema Interamericano
- Otorgamiento de becas a jóvenes afrodescendientes
- Elaboración y divulgación de estudios sobre estándares de protección internacional de afrodescendientes

Para más información sobre este proyecto, véase:

Español

<http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes.htm>

Inglés

<http://www.oas.org/dil/afrodescendants.htm>

Portugués

<http://www.oas.org/dil/port/afrodescendentes.htm>





Otras publicaciones del Departamento de Derecho Internacional sobre Afrodescendientes

Para más información, véase la siguiente dirección electrónica:

<http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes.htm>

**I Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas
“Acciones Afirmativas; Combate a la Discriminación Racial en el Empleo;
La Carga de la Prueba en Actos de Discriminación; Hate Speech/ Discurso
de Odio Racial”**

Washington D.C., USA

ISBN: 978-0-8270-5490-5

Año de Publicación: 2010

Número de páginas: 115

Idioma: original en que se presentaron las ponencias.

Disponible para descargar gratis en la página afrodescendiente
del Departamento de Derecho Internacional.

Estándares de protección de Afrodescendientes en el Sistema Interamericano.

Una breve introducción

Washington D.C., USA

ISBN: 978-0-8270-5543-8

Año de Publicación: 2011

Número de páginas: 144

Idioma: Español

Disponible para descargar gratis en la página afrodescendiente
del Departamento de Derecho Internacional.

Otras publicaciones del Departamento de Derecho Internacional

Para más información, véase la siguiente dirección electrónica:

<http://www.oas.org/dil/esp/publicaciones.htm>

Cursos de Derecho Internacional

Publicaciones que reúnen los textos de las clases dictadas en los Cursos de Derecho Internacional, organizados anualmente desde 1974 por el Comité Jurídico Interamericano y el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Las presentaciones de las clases son impresas en el idioma original presentado por los autores.

Jornadas de Derecho Internacional

Publicaciones que reúnen las ponencias presentadas en las Jornadas de Derecho Internacional, que constituyen encuentros de profesores de la materia organizados anualmente por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en el marco del Programa Interamericano para el Desarrollo de Derecho Internacional. Las ponencias son impresas en el idioma original presentado por los profesores.

Serie Temática

Libros que reeditan los Cursos de Derecho Internacional dictados desde sus inicios en volúmenes independientes organizados en torno a tres grandes temas: Sistema Interamericano; derecho internacional privado y derecho internacional público general. Los textos son impresos en idioma original presentado por cada autor.

Curso Sobre Derecho Internacional Humanitario

Texto del curso organizado por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en conjunto con el CICR en el año 2007 en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA. El libro contiene además una compilación sobre los instrumentos básicos de esta rama del derecho internacional. El libro se encuentra disponible en dos versiones diferentes, una de ellas en idioma español y la otra en inglés.

Copyright © 2011 Organización de los Estados Americanos (OEA).

Reservados todos los derechos.

Organización de los Estados Americanos

Departamento de Derecho Internacional
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Secretaría General
Washington, D.C.
2011
19th Street and Constitution Ave. N.W.
Washington, D.C. 20006
<http://www.oas.org>

Español
<http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes.htm>

Inglés
<http://www.oas.org/dil/afrodescendants.htm>

Portugués
<http://www.oas.org/dil/port/afrodescendentes.htm>

Esta publicación ha sido compilada bajo la coordinación de Roberto Rojas Dávila y Diego Moreno, del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.

Diseño: Claudia Saidon, Graphic Ideas Inc.

Departamento de Derecho Internacional
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Organización de los Estados Americanos

Para mayor información visite los siguientes links

Español

<http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes.htm>

Inglés

<http://www.oas.org/dil/afrodescendants.htm>

Portugués

<http://www.oas.org/dil/port/afrodescendentes.htm>

19th St. & Constitution Ave. NW
Washington, D.C. 20006
Tel: 202 458 3312 Fax: 202 458 3293
Email : rrojas@oas.org



Organización de los
Estados Americanos